



Popayán, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2.020)

Doctora

MARITZA GALINDEZ LÓPEZ

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

jadmin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

Ref.

EXPEDIENTE No. 19001333300920180033100
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: LUZ MILA DORADO GOMEZ Y OTROS
DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - LEASING
BANCOLOMBIA S.A.

HENRY DARIO GALVIS DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 76.331.526 expedida en Popayán, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 231.257 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Establecimiento Público del orden Nacional, en virtud del poder debidamente otorgado por el Director Territorial del Instituto Nacional de Vías - Territorial Cauca, y que solicito sea tenido en cuenta para que se me reconozca personería, encontrándome dentro de los términos de ley, me permito contestar la demanda formulada contra mi poderdante, en los siguientes términos:

I. LA DEMANDA, DOMICILIO Y REPRESENTANTE.

El Medio de Control de Reparación Directa instaurado, está dirigido entre otros contra el Instituto Nacional de Vías, establecimiento público adscrito al Ministerio de Transporte, creado mediante el Decreto 2171 de 1.992 y representado en este caso por el ingeniero JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON, mayor y vecino de Popayán – Cauca, identificado con la C. C. No. 76.311.695 expedida en Popayán - Cauca, en su condición de Director Territorial del Instituto Nacional de Vías - Dirección Territorial Cauca, de conformidad con la Resolución No. 06479 del 19 de diciembre de 2.013 y la delegación de funciones contenida en la Resolución No. 08121 del 31 de diciembre de 2.018. El Instituto Nacional de Vías tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Este instituto está representado judicialmente por el suscrito apoderado.

Instituto Nacional de Vías – Territorial Cauca
Autopista Norte – Calle 25 – Carrera 9 Esquina
Teléfonos: 239629 – 239692 FAX : 239075

<http://www.invias.gov.co>



II. A LAS DECLARACIONES, CONDENAS Y PRETENSIONES.

Desde ahora manifiesto al Honorable Juzgado de conocimiento que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS **se opone** a todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas, en tanto lo vinculen como responsable por los hechos descritos en el libelo introductorio, ello por cuanto no le asiste razón al manifestar que los perjuicios de índole material e inmaterial reclamados y causados por una falla en el servicio supuestamente imputable al INVIAS, como bien se demostrará en el transcurso del proceso. Por ello, en nombre de mi representado, solicito respetuosamente al Juzgado no acceder a la prosperidad de estas.

En su lugar, solicito que se condene en costas a la parte accionante por todos los gastos que de manera injustificada pueda incurrir el Instituto Nacional de Vías, como consecuencia de la vinculación al proceso citado en la referencia sin que **exista fundamento jurídico o fáctico alguno, distinto a la especulación y el planteamiento de hipótesis sacadas de la realidad para ello**, ya que la vía nacional, que es responsabilidad del Invias, se encontraba para la fecha de ocurrencia de los hechos en buen estado, debidamente demarcada y en general apta para la transitabilidad del flujo vehicular que utiliza la vía nacional Popayán - Mojarras con lo que acredita que la carga legalmente establecida de mantenimiento y conservación de la vía se venía y se viene haciendo de manera óptima a través del tiempo, es decir, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS ha cumplido a cabalidad sus obligaciones legales y de ninguna manera se ha sustraído a su obligación de cuidado, mantenimiento y conservación de esta importante vía.

Aclarado lo anterior, procedo a contestar los hechos de la demanda el mismo orden de presentación y de la siguiente manera:

III. LOS HECHOS NARRADOS EN LA DEMANDA.

FRENTE AL HECHO 1. - Me permito manifestar que **NO ME CONSTA** lo relativo al lugar donde vivía el señor GUSTAVO DORADO CABRERA y mucho menos las personas que integraban su núcleo familiar. Este es un asunto que deberá acreditarse en el traite del proceso a través de los medios idóneos para tal fin.

Respecto del resto de afirmaciones planteadas en este hecho, es menester señalar que tal y como la misma parte demandante lo afirma, el accidente en el que se ve involucrada la motocicleta en la que se transportaba el señor GUSTAVO DORADO como parrillero y el señor JORGE ELIECER NARVAEZ como conductor se presentó por una maniobra de conducción imprudente ejercida por el señor ANDRES FELIPE ORTEGA quien con su tractocamión al parecer invadió el carril contrario colisionando con la moto en la que venían los demandantes.

Es decir, el trágico hecho no se presenta por una condición o falencia atribuible a la vía nacional, sino que es el resultado lamentable de una maniobra de conducción imprudente atribuible única y exclusivamente a un tercero, que valga resaltar, a pesar de que se surtió frente a este el trámite de la conciliación prejudicial, finalmente no fue vinculado al proceso pues la demanda solo se admitió frente al Invias y frente a quien aparece como propietario del Vehículo LEASING BANCOLOMBIA S.A.

No está por demás advertir de una vez que también está acreditado, ello si se revisa el Informe de Accidente aportado al proceso, que el conductor de la moto, señor JORGE ELIECER NARVAEZ (Hoy demandante), NO CONTABA CON LICENCIA DE CONDUCCIÓN para la fecha de los hechos. Es más, hoy en día, tampoco presenta registro de licencia de conducción alguna en el RUNT. Esta información está claramente descrita en el Informe presentado por la Policía Judicial – Investigador de Campo con destino a la Fiscal 02 Seccional Popayán Rosa Evelyn Ortega Orozco documento que fue aportado como prueba por la parte demandante.

Entonces, es evidente que esta persona, no contaba con las cualidades o requisitos legalmente establecidos **“IDONEIDAD”** para maniobrar por las vías nacionales un vehículo, para este caso, una motocicleta y asumió con esa conducta reprochable el riesgo que finalmente lo llevó incluso a sufrir lesiones y ver como su compañero de viaje perdió la vida.

No en vano el funcionario que atendió el accidente estableció como hipótesis de su ocurrencia, para el caso de la moto, el código 139 que hace relación a la “impericia en el manejo”, misma que resulta evidente y a todas luces comprobable en consideración de que el piloto de la moto accidentada no contaba con licencia para manejar este tipo de vehículos.

Como si lo anterior no fuera poco en la cadena de eventos, tampoco quedo registrado en el Informe de Accidente que por lo menos el conductor de la moto portara los elementos “indispensables” de protección personal”, tales como el casco reglamentario, chaleco reflectivo etc para conducir una moto acrecentando así los efectos nefastos de la ocurrencia de un accidente. En efecto, la carencia de estos elementos explica por qué de la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes, especialmente las del señor GUSTAVO DORADO quien conforme se describió en su historia clínica y así también se ventila en la demanda sufrió trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, trauma craneo encefálico y trauma en extremidades los que sin duda lo llevaron a su lamentable deceso.

Para rematar, el vehículo tipo motocicleta tampoco contaba con el certificado de revisión técnico-mecánica. Lo anterior, permite entrever entonces que la

motocicleta, al no contar con tecno mecánica no estaba apta para el tránsito en carreteras, que no había elementos de protección por parte de los ocupantes de la moto y lo peor, que el conductor no contaba con idoneidad para manejarla pues no tenía licencia de conducción.

FRENTE AL HECHO 2.- Es parcialmente cierto. Solo resulta veraz en lo que se refiere a que en el accidente resultó gravemente lesionado el señor GUSTAVO DORADO, quien iba como parrillero en la motocicleta accidentada, también por supuesto a que este fallece tres (3) días después del accidente, es decir, el 27 de noviembre de 2.017.

Sin embargo, tal y como se explicó en el hecho anterior, sus graves lesiones, además de haberse producido por la carencia de elementos de protección personal, fueron causados con motivo de una colisión propiciada por un acto de conducción imprudente atribuible inicialmente al conductor del tractocamión que invadió el carril por el que transitaba la moto, y segundo, sin que podamos descartarlo de tajo, a la impericia del conductor de la moto de quien se insiste no es posible determinar su idoneidad pues conducía este vehículo sin contar con licencia y además sin contar la motocicleta con el certificado técnico mecánico que avala por supuesto la condición de la moto para su tránsito en las carreteras y vías colombianas.

Se recalca que frente a los dos vehículos las causales o hipótesis del accidente quedaron consignadas de la siguiente manera: Vehículo No. 1 (Motocicleta): Código 139: Impericia en el manejo y frente al vehículo No. 2 (tractocamión): Código 157 (otra) No estar pendiente de la vía y de las acciones de los demás usuarios viales.

Para rematar la falta de sustento jurídico de la imputación realizada en la demanda, el informe generado por el Investigador Judicial para dar cumplimiento a la orden de Policía Judicial No. 2808061 con Spoa No. 198076000637201700485 advirtió como teoría del accidente la siguiente:

“(…)

7.4 Teoría del accidente

Factor determinante (Es aquella causa que está presente en un accidente de tránsito y que si ésta no hubiese intervenido, no se hubiese presentado el accidente de tránsito)

De acuerdo a los elementos materia de pruebas antes mencionadas se puede inferir razonablemente que la acción generadora en la evolución física del accidente fue causada por el vehículo N° 2: Tractocamión, marca Kenworth, color verde, modelo 2015, de placas WDK 252, conducida por el señor ANDRES FELIPE ORTEGA ORTEGA, identificado con Cedula N° 1088972110; al invadir el carril contrario al que transitaba infringiendo el deber objetivo de cuidado, quien debió prever lo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo

(...)"

FRENTE AL HECHO 3.- Es cierto. Sin embargo, se recalca que la lamentable muerte del señor GUSTAVO DORADO no le puede ser imputable o achacable al Invias, ya que como es claro y así se desprende de las mismas pruebas aportadas por la parte accionante, el accidente no se presentó por una causa atribuible a la vía nacional sino que el mismo fue consecuencia de las maniobras de conducción imprudentes ejecutadas por el conductor del tractocamión que invadió el carril por el que transitaba la moto; igualmente, por la irresponsabilidad del conductor de la motocicleta quien no tenía idoneidad para manejar ese vehículo pues no contaba con licencia de conducción, tampoco portaba revisión tecno mecánica y como si fuera poco conducían el velocípedo sin portar los elementos de protección personal.

FRENTE AL HECHO 4.- Es cierto. Para la fecha de ocurrencia del accidente, se encontraba vigente y en ejecución el Contrato de Mantenimiento Rutinario No. 1950 de 2.016, cuyo contratista era el Consorcio Céfiro Mantenimiento, integrado por la Cooperativa de Trabajo Asociado Curiacao con una participación de 25% y el Céfiro Mantenimiento y Servicios Integrales S.A.S con una participación de 75% y cuyo representante Legal era el señor GUSTAVO DORADO quien valga aclarar no tenía ningún vínculo laboral con el Invias.

FRENTE AL HECHO 5.- Frente a este hecho vale la pena explicar que no es el Consorcio el que realizó la asamblea de accionistas sino uno de sus integrantes que como se explicó en supra 4 es la empresa Céfiro Mantenimiento y Servicios Integrales S.A.S.

FRENTE AL HECHO 6.- No me consta lo referente al valor del salario que el señor JORGE ELIECER NARVAEZ devengaba como contraprestación de su trabajo al servicio del Consorcio que ejecutaba las labores de mantenimiento rutinario de la vía. Tampoco me consta su edad y su lugar de residencia.

Respecto del accidente, y las lesiones que se aducen padeció con motivo del mismo debo señalar, tal y como se ha explicado en líneas anteriores, que las mismas fueron causadas con motivo de la colisión de la moto que conducía con un tracto camión que invadió su carril, accidente propiciado por un acto de conducción imprudente atribuible a un tercero y en el cual la vía no tubo ninguna clase de injerencia pues este tramo vial se encontraba en optimas condiciones de transitabilidad, debidamente señalizado y demarcado.

Se plantea en varios puntos de la demanda, ello desde la óptica subjetiva y acomodada del apoderado de los demandantes, que falta de "BERMA" habría sido la causa para que se presentara la colisión.

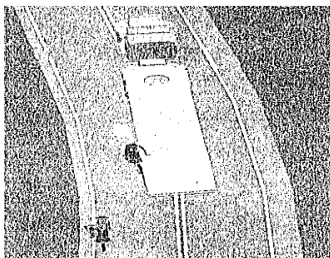
Frente a esta conjetura que lo único que pretende es desviar la atención de la imprudencia en la que incurrieron los ocupantes de la moto, concretada en que se emprendió la marcha del velocípedo sin que el señor JORGE ELIECER contara con licencia de conducción, sin elementos de protección personal y sin tecnología mecánica, se debe decir que la misma no cuenta con ningún soporte técnico que avale dicha aseveración, por el contrario, como se ha venido diciendo, la vía estaba correctamente señalizada, demarcada y con su capa asfáltica en buen estado. El acto de conducción imprudente de un tercero (invasión de carril) y la acción irresponsable de conducción de una moto sin tener idoneidad para ello son en este caso los únicos elementos determinantes en la ocurrencia y/o materialización del lamentable accidente.

FRENTE AL HECHO 7.- No me consta. Se trata de los dichos de una persona que se aduce iba delante de la motocicleta accidentada y por lo tanto se dio cuenta del accidente. Sin embargo, estos deben ser sometidos al rigor de la contradicción lo que necesariamente se hará en la audiencia de pruebas que fije para ello el Despacho.

Sin embargo, se hace necesario recalcar que en el Informe de Accidente de tránsito levantado con motivo del siniestro, en ninguna parte señala que el accidente se hubiere presentado por la falta de berma. Es claro que en dicho documento se estableció de manera clara e inequívoca que en su consumación coexistieron dos elementos esenciales y determinantes descritos así: Vehículo No. 1 (Motocicleta): **Código 139¹**: Impericia en el manejo y frente al vehículo No. 2 (tractocamión): **Código 157** (otra) No estar pendiente de la vía y de las acciones de los demás usuarios viales. Entonces no se puede caer en el distractor que pretende hacer valer la parte accionante en su demanda, que no es otro que pretender endilgar responsabilidad al Invias por la ocurrencia del insuceso basados en la hipotética situación de que el accidente se pudo evitar si el conductor de la moto, inexperto por demás, hubiera podido maniobrar el velocípedo sobre la berma para evitar colisionar con el tractocamión.

Absurdo desde cualquier punto de vista ya que por más que el tractocamión invadió el carril de la moto esta de todas maneras contaba con un espacio considerable para maniobrar sobre un costado de vía y evitar chocar con el vehículo pesado. Ello no ocurrió así porque quien manejaba la moto ni siquiera tenía licencia de conducción, luego tampoco contaba con la idoneidad exigida para conducir este velocípedo, ello sin contar que pudo haber venido con exceso de velocidad, además conducía la moto muy pegado a la línea central de la vía.

¹ Código 139: Impericia en el manejo: Cuando el conductor no tiene práctica, experiencia ni habilidad en la conducción para maniobrar ante una situación de peligro.



(imagen tomada del Informe generado por el Investigador Judicial para dar cumplimiento a la orden de Policía Judicial No. 2808061 con Spoa No. 198076000637201700485)

Se aclara que contrario a lo manifestado en este hecho por los demandantes, de conformidad con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Invias, la berma son las fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas que sirven de confinamiento lateral de la superficie de rodadura, controla la humedad y las posibles erosiones de la calzada y en ella no deben estacionarse vehículos, salvo casos eventuales por ejemplo cuando se necesite dar asistencia a un vehículo por alguna falla mecánica sufrida en la vía. Por lo tanto, tampoco es un espacio para que por ejemplo las motocicletas y/o otros vehículos transiten o realicen adelantamientos o maniobras peligrosas.

FRENTE AL HECHO 8.- No se trata de un hecho. Se aduce sobre la existencia de una declaración extrajuicio cuyo contenido deberá ser ratificado por la declarante dentro del juicio.

FRENTE AL HECHO 9.- Es cierto. De conformidad con los documentos aportados el tractocamión implicado en la ocurrencia del siniestro, vehículo de placas WDK252 es de propiedad de LEASING BANCO DE COLOMBIA S.A y su locatario es el señor JESUS ORLANDO ARCOS NARVAEZ.

FRENTE AL HECHO 10.- Es cierto. Los documentos obrantes en el proceso dan cuenta de la existencia de una investigación penal adelantada con motivo del accidente. Sin embargo, hay que aclarar que el único encartado en este asunto es el conductor del tractocamión que eventualmente, según lo determine el ente acusador, podría estar respondiendo por el delito de homicidio culposo.

FRENTE AL HECHO 11.- No se trata de un hecho. El apoderado de la parte demandante esta retomando las conclusiones establecidas en el informe FPJ11 que por demás son claras en establecer como responsable de la causación del accidente al conductor del tractocamión.

Sin embargo, no se puede dejar de lado, tal y como se ha venido advirtiendo, que el conductor de la motocicleta no contaba con licencia de conducción, que la moto no tenía tecno mecánica y que el señor GUSTAVO DORADO y JORGE ELIECER no portaban sus elementos de protección personal.

Instituto Nacional de Vías – Territorial Cauca
Autopista Norte – Calle 25 – Carrera 9 Esquina
Teléfonos: 239629 – 239692 FAX : 239075

<http://www.invias.gov.co>



FRENTE AL HECHO 12.- Es cierto parcialmente. Es cierto que el accidente se presenta, tal y como lo describen los informes allegados como prueba al proceso, por la invasión del carril efectuada por el tractocamión.

Sin embargo, tal y como ha sido expuesto, no se puede aceptar que el apoderado de los actores pretenda endilgar responsabilidad por su ocurrencia al Invias basado en una información que se cae por su propio peso, cual es que el accidente se había podido evitar si el señor JORGE ELIECER NARVAEZ, quien conducía la moto, hubiera podido maniobrar sobre la berma.

Nada mas alejado de los hechos y de lo que señalan las mismas pruebas aportadas con la demanda las cuales indican de manera clara que la colisión se presentó por el acto de conducción imprudente del conductor del tractocamión (invasión de carril), y indiscutiblemente porque al conductor de la moto le faltó pericia e idoneidad para sortear el impase.

Se repite que las pruebas dan cuenta que la moto, según se proyecta en el informe policial presentado ante la fiscal del caso, iba casi sobre la mitad de la carretera, pudiendo haber ido más hacia un lado de la vía como en efecto lo hizo la moto que iba a delante y que paso sin problema.

Pero como la moto conducida por el señor JORGE ELIECER NARVAEZ iba casi sobre el centro de la vía, se encontró con la parte que sirve para montar la carga en el tractocamión. Si se hubiere tratado de un conductor con pericia e idoneidad, quizás lo que hubiera hecho es orillar un poco la moto en el espacio que le restaba de su carril para evitar la colisión.

Esta vía, tiene un ancho de 7.50 metros con un sobreancho de carril izquierdo de 0.50 metros en tierra (Berma) carpeta asfáltica en buen estado, curvas sucesivas debidamente señalizadas en los PR99+0950 (SP-07) MARGEN DERECHO y SP-08 en el PR100+0110 margen izquierda y una señal vertical SR-30(50) lado derecho PR99+0850.

Se repite una vez más que de conformidad con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Invias, la berma son las fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas que sirven de confinamiento lateral de la superficie de rodadura, controla la humedad y las posibles erosiones de la calzada y en ella no deben estacionarse vehículos, salvo casos eventuales por ejemplo cuando se necesite dar asistencia a un vehículo por alguna falla mecánica sufrida en la vía. Por lo tanto, tampoco es un espacio para que por ejemplo las motocicletas y/o otros vehículos transiten o realicen adelantamientos o maniobras peligrosas.

En conclusión, contrario a lo manifestado por el apoderado de los demandantes el accidente **no se presenta por causa alguna atribuible a la vía** la cual se recalca se encontraba en buenas condiciones de transitabilidad, es más, ni siquiera se puede decir que la ocurrencia del siniestro se dio por falta de señalización pues es claro que los hechos se presentan producto de un acto de **conducción imprudente** imputable en primera medida al conductor del tractocamión quien según el informe de accidente invadió el carril contrario colisionando su parte trasera de costado con el de la motocicleta.

Es claro y así se puede afirmar que el apoderado de los demandantes intenta buscar una responsabilidad basada en hipótesis infundadas y simple casuística traducida en el *“COMO NO HABIA BERMA LA MOTO NO PUDO EVITAR EL ACCIDENTE”* situación a todas luces absurda, pues no se compadece con la realidad que arroja sobre los hechos la prueba documental aportada con la demanda, es decir, que el accidente se causó por el hecho determinante del conductor del tractocamión que ya sabemos invadió el carril contrario por el que transitaba la motocicleta conducida por el señor JORGE ELIECER NARVAEZ y su acompañante fallecido.

De manera pues que la responsabilidad por los presuntos daños sufridos por los demandantes no debe imputarse ni endilgarse al el Invias ello bajo el argumento de una presunta omisión en su deber de señalización o mantenimiento de la vía nacional, deber que estaba satisfecho pues la vía estaba en buen estado, demarcada y señalizada, sino en el conductor del camión tal y como este mismo pretendió en un comienzo hacerlo pues las pruebas aportadas dan cuenta de un proceso de reclamación ante los dueños del camión y su aseguradora, más sin embargo, el señor el apoderado de los demandantes no acepto la solución de arreglo económico ofrecido.

Entonces es el conductor del camión y su propietario , quienes en un proceso totalmente distinto, ya sea penal o civil por responsabilidad civil extracontractual serían los responsables o llamados a responder por los presuntos daños reclamados, ello en aplicación del principio general del derecho según el cual, **“quien por el hecho o culpa suyos causa un daño a otra persona está obligado a indemnizar los perjuicios”**, todo con las particularidades propias de esta clase de procesos tal cual las ha definido la Corte Suprema de Justicia aplicando un régimen de responsabilidad objetiva consagrado en el art. 2356 del C.C, que establece que cuando el autor y la víctima ejercen simultánea o concurrentemente la conducta peligrosa concurriendo la actividad del autor y la de la víctima, no se presenta compensación de culpas, neutralización de actividades, ni de presunciones.

FRENTE AL HECHO 13.- Parcialmente cierto. Es cierto, completamente cierto que aquí se presentó un acto de conducción imprudente atribuible inicialmente al conductor del tractocamión quien invadió el carril contrario.

Sin embargo, no es cierto tal y como parece se quiere hacer ver que el Invias haya omitido sus deberes para con el cuidado, mantenimiento y conservación de la vía puesto que la entidad ha venido cumpliendo con su función, primero al construir la carretera y sus obras complementarias incluidas la señalización de la vía, igualmente con las labores de mantenimiento rutinario y periódico que en esta se han venido adelantando a lo largo de los años.

De hecho, para la fecha de ocurrencia de los hechos se tenían los siguientes contratos en la vía nacional Mojarras - Popayán, Ruta 2503:

Contrato: 2017 de 2016.

Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, MÓDULO 7.

Contratista: CONSORCIO AMV CAUCA. – Nit. 901.024.069-1 (Integrado por JOSE MARINO RENDON MUÑOZ. NIT 10.690.175-6, con una participación del 60%, JAVIER VALDERRAMA YAGUE, NIT 12.231.611-5, con una participación del 20%, y CONSULTORES CIVILES – AMBIENTALES & CONTABLES S.A.S. NIT 900.747.348-9, con una participación del 20%).

Fecha de inicio: 26 de noviembre 2016.

Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2018.

Contrato: 1950-2016.

Objeto: MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYAN PR81+0000 – PR108+0000.

Contratista: CONSORCIO CEFIRO MANTENIMIENTO, NIT No. 900.980.946-0. (Integrado por: Cooperativa de Trabajo Asociado Curiacao – Nit: 900.019.126-8, con participación del 25%, y El Céforo Mantenimiento y Servicios Integrales S.A.S. – Nit: 900.651.508-7, con una participación del 75%)

Fecha de inicio: 18 de noviembre 2016.

Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2018.

Contrato: 792 de 2017.

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS - POPAYAN, RUTA 25, TRAMO 2503, ENTRE LOS PR0+0000 AL PR121+0000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Contratista: EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. Nit. 830.132.938-0

Fecha de inicio: 25 agosto 2017

Plazo: Cinco (5) meses.

Instituto Nacional de Vías – Territorial Cauca
Autopista Norte – Calle 25 – Carrera 9 Esquina
Teléfonos: 239629 – 239692 FAX : 239075

<http://www.invias.gov.co>



Fecha de vencimiento: 24 enero 2018.

Contrato: 914 de 2017.

Objeto: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 25 TRAMO 2503 ENTRE LOS PR0+0000 AL PR121+0000 EN EL DEPTO DEL CAUCA.

Contratista: CONSORCIO AJM, Nit: 901.103.645-1 (Integrado por Alvaro Pasaje Salcedo C.C. 5.209.801 con un porcentaje del 60%, Jaime Hernando Moreno España C.C. 12.976.091 con un porcentaje del 20% y MIRS LATINOAMERICA S.A.S. Nit: 900.241.875-6 con un porcentaje del 20%)

Fecha de inicio: 25 agosto 2017

Plazo: Cinco (5) meses.

Fecha de vencimiento: 24 enero 2018.

Tal cual se dijo líneas atrás, con los anteriores contratos se demuestra el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Nacional de Vías tendientes a la conservar, mantener y señalizar la vía nacional que nos ocupa, desvirtuándose así que la entidad que represento se haya sustraído al cumplimiento de sus obligaciones legales o que haya incurrido en una omisión o desatención en lo que al mantenimiento y conservación de la vía nacional se refiere.

Conviene anotar y aunque no es el caso que aquí se estudia y se contesta que en tanto que así no hubiera señalización o demarcación en la vía, los demandantes tampoco prueban que fuera esta la causa eficiente del accidente, máxime cuando el Código de Tránsito tiene previstas reglas que deben acoger y respetar todos quienes conducen un vehículo, así existan o no demarcaciones en la vía, sin que el desconocimiento de ellas lleve a determinar o generar de facto responsabilidad en este caso del Invias.

Sobre esta anotación vale reseñar el pronunciamiento aún vigente expuesto por una de las más respetadas magistradas que ha tenido el Tribunal Administrativo del Cauca² quien en una de sus ponencias sobre el particular refirió para aprobación de la sala lo siguiente:

“Significa lo dicho que, *el hecho de la falta de señalización en el sitio del accidente, de modo alguno facultaba a los conductores del tractor y de la motocicleta a realizar maniobras imprudentes, bajo la premisa errada de que el ejercicio de la conducción única y exclusivamente lo rigen las señales de tránsito presentes en la vía, puesto que como quedó visto, el Código Nacional de Tránsito ha previsto algunas reglas que se aplican, independientemente de que exista señalización o no, y el desconocimiento*

² Sentencia de 27 de julio de 2012, radicado 2007 00082 00, con ponencia de la doctora Carmen Amparo Ponce.

de las mismas por parte de terceros ajenos a la administración no puede generar responsabilidad en ésta última. (...)

Teniendo de presente los hechos probados arriba relatados, y la contextualización de éstos con las normas de tránsito referidas, no puede llegarse a conclusión distinta a la de que en el sub judice no **se configura el nexo de causalidad entre el daño sufrido por la parte actora y la falla en el servicio que se le atribuye al Municipio de Miranda; toda vez que la falta de señalización por parte de esa entidad territorial no fue la causa eficiente de la ocurrencia del accidente, en tanto los conductores de los vehículos colisionados debían de todas formas detenerse preventivamente a verificar si había uno que tuviera prelación por venir desde la derecha.**

Lo anterior conduce a esta Sala de decisión a concluir que, frente al Municipio de Miranda, no hay una adecuada relación de causalidad respecto de los hechos que dieron lugar al daño y los perjuicios alegados por la parte demandante, en tanto, a pesar de la no existencia de la señalización, era obligación del conductor del tractor y de los motociclistas respetar las normas de tránsito preestablecidas, siendo el primero el causante principal del accidente y los segundos favorecedores de las condiciones del mismo. Luego entonces, no puede atribuirse responsabilidad administrativa a esta entidad territorial, bajo los hechos y conductas de terceros ajenos a ella.

Así las cosas, se comprende que están probadas la concurrencia de las eximentes de responsabilidad del hecho de un tercero -atribuible al conductor del tractor-, y de culpa de la víctima, toda vez que los motociclistas transitaban a alta velocidad sin los elementos protectores reglamentarios, que rompen el nexo causal entre la falla atribuida y el perjuicio ocasionado al demandante. Situación de la que se desprende la negación de las pretensiones en contra del Municipio de Miranda – Cauca.”

Esta conclusión no resulta caprichosa pues ha sido la posición reiterada también del Consejo de Estado quien también ha expuesto sobre el particular lo siguiente:

“En gracia de discusión, en este caso particular, la falta de señalización del sitio en el que se produjo el accidente, por si sola, no permite deducir responsabilidad de las entidades demandadas, como quiera que no se tiene conocimiento sobre la forma cómo ocurrió el accidente, mucho menos sobre la conducta que habrían adoptado las personas implicadas en él.

De todo lo afirmado por los actores, lo único cierto son las lesiones del señor José Arialdo Naranjo como consecuencia de un accidente de tránsito en la carretera que comunica a la ciudad de Yopal con la de Aquazul, en el

Departamento del Casanare; sin embargo, del exiguo material probatorio recaudado en el plenario, no es posible inferir que las lesiones del citado señor obedecieran a una falla del servicio imputable a las demandadas, pues, como se dijo atrás, ni siquiera hay forma de saber cómo ocurrió el accidente.

Puede concluirse, entonces, que en el sub judice las escasísimas pruebas obrantes en el plenario resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad de las entidades demandadas. Se requería, además, acreditar cuál fue la conducta omisiva en la que habrían incurrido las entidades demandadas, y si ésta fue la causante del accidente que involucró un vehículo particular y una motocicleta, pero además era necesario acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente. Nada de eso se encuentra probado en el proceso, razón por la cual no podrán prosperar las pretensiones de la demanda”³.

Se recuerda que la imputación del daño es un elemento que permite atribuir responsabilidad al Estado, para lo cual es forzoso que quede plenamente probada la relación de causalidad ente el hecho dañoso y la actividad desplegada por sus agentes, como causa eficiente y determinante, cosa que aquí se extraña pues la parte actora se quiere hacer valer de circunstancias hipotéticas para buscar una responsabilidad que no existe respecto de la ocurrencia del accidente que solo le es reclamable al conductor del camión y porque no decirlo al de la moto que no tenía idoneidad para manejar el vehículo por las carreteras nacionales.

FRENTE AL HECHO 14.- Es falso. En tanto se llega a conclusiones que la prueba documental aportada con la misma demanda no indica.

No se puede venir a afirmar que la vía no estaba demarcada máxime cuando en el mismo informe de accidente elaborado el día de los hechos se consignó que la vía nacional en ese sector se encontraba en **“buen estado”, con iluminación artificial buena, con señalización vertical “de no adelantar”, con demarcación línea central amarilla continua, línea de carril blanca continua y línea de borde blanca.**

Antes y después del sitio del accidente se encuentran señales que indican curvas sucesivas, al igual que en todo lo largo de la vía se indica que la velocidad no puede ser mayor a 50 km/hora. Realmente no se entiende la intensión del apoderado de los demandantes al afirmar que la vía había sido raspada, pues se repite en el informe de Accidente se indicó de manera clara que la vía presentaba buen estado.

³ Consejo de Estado-Sección Tercera, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, Sentencia del 22 de abril de 2009, radicado: 85001-23-31-000-1995-00099-01 (16192), actor: José Aivaldo Naranjo y otros.

FRENTE A LOS HECHOS 15 y 16.- Esta es una condición inequívoca de que los demandantes intentaron resolver con los responsables el asunto por intermedio de la aseguradora. Sin embargo, como es la costumbre de algunos abogados, resulta más beneficioso demandar al Estado que buscar indemnización de particulares o de sus aseguradoras ya que muchas veces ofrecen montos poco atractivos o también puede darse el caso de que el encartado no cuente con dinero para responder por sus infracciones quedando, si es una sentencia condenatoria en la jurisdicción ordinaria civil en el papel ello en aplicación de una condición muchas veces generalizada y de continua ocurrencia que indica que quien “nada tiene con nada responde”.

En cambio, con el Estado en principio no hay pierda, siempre habrá dinero para pagar **tarde o temprano** las condenas, de ahí que en este caso, se haya preferido en vez de demandar por “responsabilidad civil extracontractual” al propietario del camión, buscar una responsabilidad administrativa por “falla en el servicio” bajo el argumento de una omisión en un deber funcional, para el caso del Invias de señalar o prever aspectos atinentes a la vía, tales como la existencia de una berma amplia para que los usuarios conductores esquiven a otros irresponsables que no acaten las normas de conducción y de tránsito, argumento absurdo si se tiene en consideración que el siniestro se presentó por una causa externa a la vía cual fue la maniobra de conducción imprudente del conductor del tractocamión.

FRENTE AL HECHO 17.- No es un hecho. Se trata de las conclusiones expuestas en el Informe presentado a la Fiscalía. Sin embargo, se recalca y aclara que en el mismo, de ninguna manera se atribuye la ocurrencia del accidente a algún factor relacionado con la vía nacional. Por el contrario, se planteó como teoría de la ocurrencia del accidente, achacable al tractocamión, la de “invasión de carril”, actuación con la que el conductor del vehículo pesado infringió su deber objetivo de cuidado.

FRENTE A LOS HECHOS 18, 19 y 20.- No se trata hechos sino de afirmaciones con marcada subjetividad y sesgo a la conveniencia de los demandantes que carecen soporte probatorio alguno y que no se compadecen con la información que proporciona la misma prueba documental que se allegó con la demanda la cual es explícita para establecer que el accidente, en su modo de ocurrencia y causa, obedeció a la acción particular y determinante del conductor del tractocamión que invadió el carril contrario sin observar las medidas de seguridad del caso, causando con su conducta descuidada el accidente.

Olvida la parte demandante que en estos eventos en los cuales se reclama responsabilidad por falla en el servicio incumbe a la parte que la alega probar los hechos, el daño y el nexo causal, y este último de ninguna manera aparece acreditado puesto que el accidente no se presenta por causas atribuibles al estado

de la vía ni mucho menos por la falta de señalización. Este accidente se origina por una acción personal de un tercero que, de manera imprudente, según da cuenta el informe policial de accidente, invadió el carril contrario sin tener precaución, situación que se erige en la causa eficiente y determinante de la ocurrencia del choque.

En relación con el concepto de la causa eficiente del daño, ha sido la misma jurisprudencia del Consejo de Estado citando doctrina acerca del tema, la que ha señalado que la causa eficiente es lo que se considera como fundamento u origen de algo; en tal sentido basta la verificación de la relación antecedente-consecuente para que pueda sostenerse que un hecho es productor y otro el producido, uno el engendrante y otro el engendrado.

De manera tal que, aterrizando dicha argumentación al caso concreto, se tendría que entrar a dilucidar cuál es la relación existente en la cadena de situaciones planteadas en la demanda, a saber, iniciando por la más importante, la conducción imprudente de quien manejaba el vehículo pesado, seguidamente de la realización de una maniobra que involucró la invasión de carril y la impericia del conductor de la moto para establecer, cual de todas estas situaciones terminó por generar el accidente reclamado.

Para esta defensa, es claro que la responsabilidad en la colisión de los dos vehículos recae sobre el conductor del tractocamión, ya que tal y como se ha venido diciendo, aquel invadió el carril de la motocicleta causando con ese actuar el accidente.

Así las cosas, en lo que va del proceso no está demostrada la existencia de falla en el servicio reclamada y que pueda serle atribuida a esta entidad, pues para que ésta se estructure debidamente se hace necesaria la concurrencia de los tres (3) supuestos de que trata el artículo 90 superior: **i)** la actuación de la administración, **ii)** el nexo de causalidad, y **iii)** un daño causado imputable a la susodicha administración; aquí, como ya se manifestó reiteradamente, no existe relación de conexidad entre los hechos planteados en la demanda, el daño alegado y la actuación del INVIAS.

FRENTE AL HECHO 21.- Es cierto, el trámite prejudicial fue agotado ante la Procuraduría 183 Judicial I para Asuntos Administrativos de Popayán.

En tales términos se procedió con la expedición de la Constancia de conciliación prejudicial fracasada para efectos de que los demandantes acudieran, tal como lo hicieron, a demandar ante el Contencioso Administrativo.

IV. A LOS FUDAMENTOS DE DERECHO

Se trae en mención en este acápite por parte del apoderado de los demandantes argumentación traída de pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional sobre el tema del derecho a la salud e integridad personal, **temática que no guarda correspondencia** alguna con la pretensión ultima de los demandantes, cual es la que se declare la responsabilidad por falla en el servicio de las entidades aquí demandas, responsabilidad que se alega bajo el tamiz de una presunta omisión en la señalización de la vía y de control del tráfico vehicular con motivo de la realización de una obra pública.

Entonces, centrándonos en lo que interesa y que para el caso de esta defensa tiene que ver con la presunta falla reclamada del Invias en disponer de señalización de la vía nacional, se debe decir que si bien es cierto, el Consejo de Estado en algunos casos ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en su deber de señalar obras, también lo es que dicha responsabilidad no es objetiva, por ello, en materia de responsabilidad por falla del servicio, corresponda al juzgador entrar a determinar la naturaleza y contenido de las obligaciones que le sean atribuibles a la entidad encargada o competente, ya que sólo a partir de allí es posible constatar la existencia del incumplimiento susceptible de comprometer su responsabilidad sí, además, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, el mismo puede tenerse como causa eficiente y determinante del daño reclamado.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad estatal que aquí se predica solo puede ser declarada cuando se acredite de manera **suficiente** la concurrencia de un daño antijurídico y la imputabilidad, demostrando que dicho daño cuya reparación se reclama puede ser atribuido al Estado, y que su acción u omisión es innegablemente el elemento que dio origen a las lesiones que sufran las personas en sus derechos o intereses, daño que obligatoriamente debe probarse que le resulta imputable al Estado.

Así pues, cuando esto no se acredite, las suplicas de la demanda deben denegarse ya que es obligación de la parte que alega la configuración de un perjuicio entrar a demostrar una relación de causa y efecto entre el mencionado daño y la falla en el servicio, es decir, una conducta negligente u omisiva de parte de la administración que implica su desconocimiento o violación a una obligación a cargo del Estado.

En relación con el nexo causal, la jurisprudencia es clara y ha enseñado que este debe estar debidamente acreditado. Contrario a esto, en el presente caso no está probado que el accidente haya sido ocasionado, **en su entidad y forma de ocurrencia**, por la ausencia de señalización, ni siquiera por la no presencia de

personal que controlara el tráfico vehicular en esa zona, pues es claro que el accidente se presenta por la acción particular de un tercero - *conductor del tractocamión*- que ejecutó sin precaución una maniobra de adelantamiento con invasión de carril causando la colisión con la moto que venía en el carril contrario.

De manera pues que no basta como se ha advertido que se cite jurisprudencia o normatividad que muchas veces no viene al caso (**no se está discutiendo un tema de negatoria de atención médica, o que el Estado esté en mora respecto del estado de salud de los demandantes**), ya que de lo que se trata es que la parte interesada en que sus pretensiones prosperen demuestre fehacientemente que el daño reclamado está ligado indefectiblemente por nexo de causalidad a una omisión de un deber legal, en este caso imputable al Invias, y que dicha omisión fuere sin lugar a dudas la que tuvo incidencia directa y determinante en la acusación del daño.

En este caso, tal cual se viene repitiendo, a pesar de que existe un daño, el mismo no le es imputable a mi representado siendo que no basta con acreditar el daño para exigir responsabilidad patrimonial del Estado.

V. A LAS PRUEBAS SOLICITADAS

Respecto de la prueba documental y testimonial enunciada en este acápite, no me opongo, pero solicito en evento de que así se determine, que se niegue requerir documentación que ya reposa en el expediente.

VI. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Me opongo a la estimación de la cuantía realizada por el apoderado de la parte demandante respecto de los presuntos perjuicios causados en la modalidad de daño moral y material, toda vez que como se ha venido argumentando a lo largo del presente escrito mi representado no puede ser responsabilizado de las presuntas fallas que se aducen en el libelo inicial, habida cuenta que en el *sub lite* no concurren los elementos esenciales de la responsabilidad endilgada al Instituto Nacional de Vías, al no encontrarse probada una acción u omisión por parte de mi representado que generará a los demandantes el daño reclamado y tampoco se configura un nexo causal entre el actuar de mi prohijado y el presunto daño irrogado.

VII. RAZONES DE LA DEFENSA

Dando aplicación estricta a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad estatal solo podrá declararse en el evento de que se acredite de manera suficiente la concurrencia de un daño y que el mismo le sea

imputable o atribuido al Estado, y que su acción u omisión configuran el elemento desencadenante del daño reclamado. De manera que, cuando dicho daño antijurídico no se pueda imputar o no se establezca el nexo de causalidad (causa y efecto entre el mencionado daño y la falla en el servicio), la pretensión dirigida a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado está llamada a fracasar.

De conformidad con los argumentos expuestos en el libelo introductorio, y en lo que respecta directamente al Invias, **la causa del accidente obedeció a supuesta falta de señalización, demarcación y berma de la vía nacional**, omisión que según su dicho se constituye en elemento determinante de la ocurrencia del accidente.

Bajo este contexto, se resalta una vez más que no existe prueba alguna que atribuya a la vía la causa del accidente.

Es de resaltar y recordar que de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado⁴, para que se configure la falla en el servicio, se hace necesaria la existencia de tres elementos fundamentales: "(...) 1) *el daño antijurídico sufrido por el interesado*, 2) *la falla del servicio propiamente dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada*, y finalmente, 3) *una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio (...)*".

Como ya se dijo, en casos como el *sub examine*, donde el daño se reclama con base en la supuesta omisión en la señalización de las vías, la responsabilidad debe estudiarse desde la óptica de la falla del servicio, por ello se torna en forzosa que la parte que reclama tal falla entre a demostrar que la misma existió y que aquella se produjo por el incumplimiento del deber de adoptar las medidas necesarias, eficaces y tendientes a prevenir e informar a las personas por ejemplo sobre la existencia de riesgo asociados con la construcción, mantenimiento, o recuperación de vías, junto con un perjuicio y el nexo de causalidad entre ambos.

Como ya se ha venido advirtiendo en la presente contestación, los documentos aportados con la demanda dan cuenta de que el accidente no se presentó por el mal estado de la vía, ni siquiera por la supuesta falta de señalización, demarcación o berma amplia, el accidente se presenta como producto de un acto de **conducción imprudente** imputable en primera medida al conductor del tractocamión que según el informe de accidente de tránsito invadió el carril por el

⁴ Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), de Lino Antonio Amortegui Guzmán vs. Nación – Ministerio de Defensa).

que transitaba la motocicleta ocupada por los señores JORGE ELIECER NARVAEZ y GUSTAVO DORADO CABRERA colisionando con esta por un costado.

La declaración juramentada rendida por la señora ILDE LEON MOLINA ante el investigador criminalístico y que obra como prueba documental aportada con la demanda es ilustrativa y guarda concordancia con la hipótesis del accidente consignada por el SI JORGE FERNANDEZ (quien atendió el accidente) que la referencio respecto del Vehículo No. 1 (Motocicleta): **Código 139⁵**: Impericia en el manejo y frente al vehículo No. 2 (tractocamión): **Código 157** (otra) No estar pendiente de la vía y de las acciones de los demás usuarios viales.

En conclusión, se puede afirmar sin ninguna duda que el apoderado de los demandantes intenta buscar una responsabilidad basada en hipótesis infundadas y simple casuística traducida en el *“COMO NO HABIA BERMA LA MOTOCICLETA NO PUDO ESQUIVAR O MANIOBRAR PARA NO COLISIONAR CON EL TRACTOCAMION”*, situación a todas luces absurda, pues no se compadece con la realidad que arroja sobre los hechos la prueba documental aportada con la demanda, es decir, que el accidente se causó por el hecho único y determinante del conductor del camión quien según el reporte policial invadió el carril contrario por el que transitaba la motocicleta ocupada por JORGE ELIECER y GUSTAVO DORADO.

De manera pues que la responsabilidad por los daños sufridos por los demandantes no debe imputarse ni endilgarse al Invias ello bajo el argumento de una presunta omisión en su deber de cuidado, mantenimiento y conservación de la vía pues como se ha venido diciendo el accidente no se presentó por causa alguna atribuible a esta sino por la acción imprudente de sus usuarios.

Es entonces el propietario del tractocamión quien en un proceso totalmente distinto, ya sea penal o civil por responsabilidad civil extracontractual sería el llamado a responder por los daños reclamados, ello en aplicación del principio general del derecho según el cual, “quien por el hecho o culpa suyos causa un daño a otra persona está obligado a indemnizar los perjuicios”, todo con las particularidades propias de esta clase de procesos tal cual las ha definido la Corte Suprema de Justicia aplicando un régimen de responsabilidad objetiva consagrado en el art. 2356 del C.C, que establece que cuando el autor y la víctima ejercen simultánea o concurrentemente la conducta peligrosa concurriendo la actividad del autor y la de la víctima, no se presenta compensación de culpas, neutralización de actividades, ni de presunciones.

⁵ Código 139: Impericia en el manejo: Cuando el conductor no tiene práctica, experiencia ni habilidad en la conducción para maniobrar ante una situación de peligro.

Instituto Nacional de Vías – Territorial Cauca
Autopista Norte – Calle 25 – Carrera 9 Esquina
Teléfonos: 239629 – 239692 FAX : 239075

<http://www.invias.gov.co>

Sin embargo, y como ya se dijo en respuesta a uno de los hechos de la demanda es más beneficioso demandar al Estado que buscar indemnización de particulares, ya que estos con frecuencia no tienen dinero para responder por sus infracciones quedando las sentencias en el papel ello en aplicación de una condición muchas veces generalizada y de continua ocurrencia que indica que quien “nada tiene con nada responde”.

En cambio, con el Estado en principio no hay pierda, siempre habrá dinero para pagar ***tarde o temprano*** las condenas, de ahí que en este caso, se haya preferido encargar al Invias buscando que se declare una responsabilidad administrativa por “falla en el servicio” bajo el argumento de una omisión en un deber funcional, para el caso del Invias de señalizar y demarcar la vía, argumento absurdo si se tiene en consideración como tantas veces se ha dicho a lo largo de este escrito que el accidente se presentó por una maniobra de conducción imprudente atribuible al conductor del tractocamión y no a una deficiencia o falencia de la vía nacional.

De manera que en el presente asunto no se encuentran probados en forma clara, precisa y contundente los elementos de la falla en el servicio, pues no se prueba en forma alguna el nexo de causalidad entre el accidente, el daño alegado y la actuación u omisión atribuible al Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Así las cosas, no se le puede endilgar responsabilidad al INVIAS por los daños que reclaman los demandantes, ello si se tiene en cuenta que no se ha probado la omisión de algún deber legal o funcional atribuible al Invias para con la vía, menos aún **que la falta de señalización, demarcación o berma en las proporciones solicitadas en la demanda** se constituyeran en los factores determinantes y exclusivos para la ocurrencia del accidente o la causa eficiente del daño reclamado.

Con relación al concepto de la causa eficiente del daño, se itera que ha sido el Consejo de Estado citando doctrina acerca del tema, la que ha señalado que la causa eficiente es lo que se considera como fundamento u origen de algo; en tal sentido basta la verificación de la relación *antecedente - consecuente* para que pueda sostenerse que un hecho es productor y otro el producido, uno el engendrante y otro el engendrado.

De manera tal, que aterrizando dicha argumentación al caso concreto, se tendría que entrar a dilucidar cuál es la relación existente en la cadena de situaciones planteadas en la demanda, a saber, iniciando por la más importante, las circunstancias que llevaron a la colisión de los dos vehículos y concretamente la actuación irresponsable del conductor del tractocamión quien ivadió el carril contrario sin tomar las precauciones del caso, para establecer, cual de todas estas situaciones terminó por generar el accidente reclamado.

No se puede pasar por alto que el Invias ha venido cumpliendo con su función, primero al construir la carretera y sus obras complementarias incluidas la señalización de la vía, igualmente con las labores de mantenimiento rutinario y periódico ya que, para la fecha de ocurrencia de los hechos, se encontraban en ejecución los siguientes contratos en la vía nacional Mojarras - Popayán, Ruta 2503:

Contrato: 2017 de 2016.

Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, MÓDULO 7.

Contratista: CONSORCIO AMV CAUCA. – Nit. 901.024.069-1 (Integrado por JOSE MARINO RENDON MUÑOZ. NIT 10.690.175-6, con una participación del 60%, JAVIER VALDERRAMA YAGUE, NIT 12.231.611-5, con una participación del 20%, y CONSULTORES CIVILES – AMBIENTALES & CONTABLES S.A.S. NIT 900.747.348-9, con una participación del 20%).

Fecha de inicio: 26 de noviembre 2016.

Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2018.

Contrato: 1950-2016.

Objeto: MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYAN PR81+0000 – PR108+0000.

Contratista: CONSORCIO CEFIRO MANTENIMIENTO, NIT No. 900.980.946-0.(Integrado por: Cooperativa de Trabajo Asociado Curiacao – Nit: 900.019.126-8, con participación del 25%, y El Céforo Mantenimiento y Servicios Integrales S.A.S. – Nit: 900.651.508-7, con una participación del 75%)

Fecha de inicio: 18 de noviembre 2016.

Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2018.

Contrato: 792 de 2017.

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS - POPAYAN, RUTA 25, TRAMO 2503, ENTRE LOS PR0+0000 AL PR121+0000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Contratista: EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. Nit. 830.132.938-0

Fecha de inicio: 25 agosto 2017

Plazo: Cinco (5) meses.

Fecha de vencimiento: 24 enero 2018.

Contrato: 914 de 2017.

Objeto: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 25 TRAMO 2503 ENTRE LOS PR0+0000 AL PR121+0000 EN EL DEPTO DEL CAUCA.

Contratista: CONSORCIO AJM, Nit: 901.103.645-1 (Integrado por Alvaro Pasaje Salcedo C.C. 5.209.801 con un porcentaje del 60%, Jaime Hernando Moreno España C.C. 12.976.091 con un porcentaje del 20% y MIRS LATINOAMERICA S.A.S. Nit: 900.241.875-6 con un porcentaje del 20%)

Fecha de inicio: 25 agosto 2017

Plazo: Cinco (5) meses.

Fecha de vencimiento: 24 enero 2018.

Tal cual se dijo líneas atrás, con los anteriores contratos se demuestra el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Nacional de Vías tendientes a la conservar, mantener y señalizar la vía nacional que nos ocupa, desvirtuándose así que la entidad que represento se haya sustraído al cumplimiento de sus obligaciones legales para con la vía desvirtuándose con ello una omisión o desatención en lo que al mantenimiento y conservación de la vía nacional se refiere.

El Honorable Consejo de Estado, de manera pacífica ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que en este tipo de asuntos se requiere, **acreditar** además de cuál fue la conducta omisiva en la que habrían incurrido la o las entidades demandadas, **si ésta fue la causante del accidente**, ya que la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte, de acuerdo con lo establecido anteriormente en el artículo 177 del C.P.C. hoy en el 167 del C.G.P.

Conforme lo anterior, en el presente caso no existe actuación del Invias ni por vía de acción ni por vía de omisión, tampoco entonces, se puede hablar de un daño causado por una actuación de la administración en este caso el INVIAS y mucho menos de un posible nexo de causalidad, entre el daño causado y la actuación de la administración, ya que dicha actuación no existió, por el contrario se rompe el nexo de causalidad ya que el accidente tuvo su origen **en el actuar irresponsable del conductor del tractocamión** quien no guardó precaución y pericia en la conducción del vehículo pesado invadiendo de manera peligrosa el carril contrario lo que terminó ocasionando la colisión entre los dos vehículos.

Entonces, a juicio de esta defensa, en el presente asunto, es claro que se configuró u operó el hecho de un tercero, que se recuerda es el conductor del tractocamión, prosperando por ello una de las causales de exoneración de responsabilidad, en este caso del Invias, causal que reúne los tres requisitos exigidos la jurisprudencia del tribunal de cierre de esta jurisdicción, es decir, fue la actuación del tercero la causa exclusiva del daño; se trató de un tercero sin ningún vínculo contractual con el Invias o lo que es lo mismo ajeno al servicio y que su acto de conducción imprudente y descuidada resultó imprevisible e irresistible a la entidad que represento.

Instituto Nacional de Vías – Territorial Cauca
Autopista Norte – Calle 25 – Carrera 9 Esquina
Teléfonos: 239629 – 239692 FAX : 239075

<http://www.invias.gov.co>

Es así como resulta a todas luces claro que el accidente de tránsito se produjo como consecuencia de un acto de conducción imprudente y descuidado de parte del conductor del vehículo pesado, quien, al realizar una maniobra de adelantamiento en curva no tuvo la precaución de mirar que por el carril contrario, el cual invadió, transitaba la motocicleta en la que se desplazaban los hoy demandantes, razón por la cual los hechos acaecidos eran imprevisibles e irresistibles a mi representado.

Concluyendo, no existe nexo de causalidad entre el daño causado por el accidente y alguna actuación u omisión que se le pueda achacar al Invias de ahí que tampoco está demostrada la existencia de la falla en el servicio reclamada y que pueda serle atribuida a esta entidad, pues para que ésta se estructure debidamente se hace necesaria la concurrencia de los tres supuestos de que trata el artículo 90 superior: **i)** la actuación de la administración, **ii)** el nexo de casualidad, y **iii)** un daño causado imputable a la susodicha administración; aquí, como ya se manifestó reiteradamente, no existe relación de conexidad entre los hechos planteados en la demanda, el daño alegado y la actuación del INVIAS.

De todo lo afirmado en el libelo inicial, lo único que resultaría parcialmente comprobable son las lesiones sufridas por los ocupantes de la moto incluida la lamentable muerte del señor GUSTAVO DORADO y los daños presentados en el vehículo como consecuencia de la colisión con el tractocamión situaciones que si bien constituyen un daño el mismo no puede atribuírsele al Invias ya que como se ha venido advirtiendo y reiterando, las pruebas que reposan en el expediente, concretamente la información contenida en el Informe de accidente dan cuenta sin lugar a dudas de que este se presentó porque el conductor del tractocamión no guardó la precaución del caso en su conducción y realizó una maniobra de adelantamiento invadiendo el carril contrario sin percatarse de que por el carril contrario venia la motocicleta en la que se transportaban los afectados.

Sobre esta conclusión resulta pertinente traer en mención un pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se dijo:

“Puede concluirse, entonces, que en el sub judice las escasísimas pruebas obrantes en el plenario resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad de las entidades demandadas. Se requería, además, acreditar cuál fue la conducta omisiva en la que habrían incurrido las entidades demandadas, y si ésta fue la causante del accidente que involucró un vehículo particular y una motocicleta, pero además era necesario acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente. Nada de

eso se encuentra probado en el proceso, razón por la cual no podrán prosperar las pretensiones de la demanda⁶.

Probar los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones de los demandantes **es una carga** que de ninguna manera puede entrar a suplir el director del proceso, ya que le corresponde a la parte demandante, quien evidentemente es el interesado en demostrar los hechos que le resulten favorables a sus pretensiones, a quien le corresponde crear en el operador judicial el absoluto convencimiento de que el accidente alegado se presentó en su forma y entidad como consecuencia de la falta de señalización o de algún desperfecto de la vía, lo contrario equivaldría a trasladar la carga de la prueba al operador jurídico, quien si bien tiene el deber de interpretar la demanda y de decretar pruebas solicitadas por las partes y las de oficio que considere convenientes, no puede remediar la inactividad de la parte accionante, ni actuar como si fuera tal, como lo ha indicado la jurisprudencia contencioso administrativa con sustento en el artículo 167 del Código General del Proceso, que prevé: **“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”**.

Se insiste una vez más que, aunque se pueda constatar la existencia de un daño, este no se ha acreditado que su ocurrencia le sea imputable a la entidad que represento.

Al respecto el Consejo de Estado⁷ ha señalado que:

“(...) Ahora bien, constada la existencia del daño antijurídico, la Sala aborda el análisis de imputación dirigido a establecer si el mismo deviene imputable a la administración pública.

Sobre el particular, es pertinente señalar que en cada asunto específico se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de las mismas se define en qué casos se está en presencia de un daño imputable al Estado.

(...)

En efecto, al demandante no le basta acreditar la existencia de un daño antijurídico sino que es indispensable, a partir del empleo de todos los instrumentos probatorios –directos o indirectos– consagrados por el

⁶ Consejo de Estado-Sección Tercera, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, Sentencia del 22 de abril de 2009, radicado: 85001-23-31-000-1995-00099-01 (16192), actor: José Arialdo Naranjo y otros.

⁷ Sentencia del H. Consejo De Estado - Sección Tercera -, del 26 de mayo de 2010, Rad. No. 50001 23 31 000 1996 05291 01 (Int. 18997), C.P: Enrique Gil Botero.

ordenamiento jurídico, acreditar que esa lesión o afectación fue producto de la acción u omisión de la entidad pública demandada.

En el caso concreto, es incontrastable que ninguno de los medios de convicción que integran el acervo probatorio son indicativos de que fueron miembros del Ejército Nacional los que infligieron las heridas al actor principal; como se aprecia, tanto los informativos de la Justicia Penal Militar, como la certificación emitida por la Personería Municipal de San José del Guaviare, no dan cuenta de la existencia de los hechos narrados en el libelo demandatorio. Por el contrario, los diversos elementos probatorios distan mucho de acreditar la imputación fáctica y jurídica alegada y, por ende, de ellos sólo se desprende la existencia del daño antijurídico, elemento este último que, si bien es necesario, deviene insuficiente por sí solo para configurar el juicio de responsabilidad y la existencia o no de la obligación de reparar.

*En ese orden de ideas, al margen del régimen jurídico aplicable a este asunto, la Sala se abstendrá de abordar el estudio del mismo (imputatio iure) toda vez que al no haberse acreditado **la imputación de primer nivel o fáctica**, se torna innecesario continuar con el juicio de responsabilidad en la medida que desde el plano material, óntico o fáctico no se probó que el daño no (sic) fue producto del actuar de la administración pública.*

Sobre el particular, es incuestionable que de las pruebas que obran en el proceso no es posible atribuir el daño antijurídico irrogado a los demandantes a la institución demandada, porque no quedaron acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, lo que lleva a afirmar sin anfibología alguna que no se demostraron los supuestos fácticos invocados en el libelo petitorio (...)” (Se destaca)

Significa lo anterior que al no estar probado que el accidente se presenta por causas atinentes a la vía, no es dable derivar responsabilidad alguna a cargo del Instituto Nacional de vías, ya que como se mencionó líneas arriba la parte demandante desconoció el postulado contenido en el artículo 167 del C.G.P., que establece la carga probatoria de los hechos o supuestos en cabeza de quien los alega.

Bajo este entendido, no puede dejarse de lado que la carga de la prueba radica en cabeza de la parte demandante, referida en primer orden a la acreditación del daño que incluye necesariamente la prueba de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicho daño se desarrolló, al ser forzosa la preexistencia de una imputación fáctica para proceder así con la realización de la imputación jurídica, circunstancias que, en ese sentido, aún no han sido acreditadas.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que el Invias ha venido cumpliendo con su función, primero al construir la carretera y sus obras complementarias incluidas la señalización de la vía, igualmente con las labores de mantenimiento rutinario y periódico ya que para la fecha de ocurrencia de los hechos, se encontraban en ejecución varios contratos con los cuales se demuestra el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Nacional de Vías tendientes a la conservar, mantener y señalar la vía nacional que nos ocupa, desvirtuándose así una omisión desatención o sustracción de su obligaciones y de contera la falla en el servicio reclamada.

En consecuencia, ante la falta de acreditación de que el accidente se haya presentado por causas atribuibles a la vía y por el hecho de que pudo existir culpa por parte del conductor del camión (quien también está vinculado al proceso) , se puede concluir que en el presente asunto no se demuestra la existencia de falla en el servicio reclamada y atribuida a esta entidad, pues para que ésta se estructure debidamente se hace necesaria la concurrencia de los tres supuestos de que trata el artículo 90 superior: **i)** la actuación de la administración, **ii)** el nexo de causalidad, y **iii)** un daño causado imputable a la susodicha administración; aquí, como ya se manifestó de manera reiterada, no existe relación de conexidad entre los hechos planteados en la demanda, el daño alegado y la actuación del INVIAS.

VII. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

Finalmente, y solo en gracia de discusión, previendo que el señor juez de conocimiento encuentre alguna responsabilidad en el Instituto Nacional de Vías, es importante tener en cuenta que el INVIAS constituyó con la COMPAÑÍA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., entre otras la póliza No. **2201217017756 de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, vigente desde el día dieciséis (16) de junio de 2.017 hasta el día primero (1º) de agosto de 2.018, póliza que ampara las indemnizaciones en que pueda resultar civilmente responsable el INVIAS, por perjuicios a terceros como consecuencia de daños personales o daños materiales, es decir en cosas de terceros y/o perjuicios económicos resultantes de las labores y operaciones llevadas a cabo por contratistas en las carreteras y en general en la infraestructura vial a cargo en el territorio nacional, lo cual encuadra perfectamente en el caso que nos ocupa, razón por la cual, y previendo que el señor juez de conocimiento atribuya alguna responsabilidad al INVIAS; razón por la cual llamaré en garantía a esta aseguradora.

Teniendo en cuenta la vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual es evidente que estaba vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos, es decir, para el día **20 de noviembre de 2.017**.

Es reiterar que el presente llamamiento en garantía se hace previendo que la señora juez de conocimiento, en un hipotético caso, impute por alguna razón, responsabilidad al INVIAS frente a los hechos y pretensiones de los demandantes.

VIII. EXCEPCIONES

Con fundamento en los anteriores argumentos de hecho y de derecho, me permito presentar, además de las oposiciones propuestas, las siguientes excepciones:

8.1. INEXISTENCIA DEL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA ACCIÓN U OMISIÓN QUE SE LE PUEDA ATRIBUIR AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS – AUSENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO ALEGADA - CONDUCCIÓN DESCUIDADA Y PELIGROSA DEL CONDUCTOR DEL TRACTOCAMIÓN (SU MANIOBRA DE CONDUCCIÓN CONSTITUYE UNA EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD - HECHO DE UN TERCERO).

Estas excepciones se configuran bajo el entendido de que el accidente no tiene origen en el estado o condición de la vía, ni siquiera, por la presunta falta de señalización o por la absurda conclusión del demandante de que en la vía era necesaria un espacio de berma para que el motociclista hubiera podido sortear el accidente, pues se reitera con insistencia que la vía donde se presentaron los hechos se encontraba para ese calenda en buen estado de transitabilidad y con la señalización requerida dada sus particularidades (incluida la de velocidad y la de no adelantar en curva) de ahí que no pueda predicarse o reclamarse responsabilidad alguna de la administración, porque sencillamente no está acreditado que el daño se haya producido como consecuencia de una falla en el servicio atribuible a la vía y por ende al Invias.

Al respecto, el Consejo Estado ha manifestado, por ejemplo, en la sentencia de la Sección Tercera del 24 de febrero de 2.005 radicación: 85001-23-31-000-1993-00074-01 (14170), Mag. Ponente Ramiro Saavedra Becerra, que en uno de sus apartes dice lo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estad o tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio (...).

Este punto también fue tratado en otra sentencia del Consejo de Estado, radicado No. 05001-23-24-000-1993-0288-01(13.818) de Sección 3ª, 11 de noviembre de 2.002 -Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, en la que se sostuvo lo siguiente:

“El elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo, la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito. En relación con los hechos

que participan en la producción de un daño es importante diferenciar, como lo explicado la Sala, las imputaciones fácticas y jurídicas, entendidas las primeras como las indicaciones históricas referidas a los hechos en los cuales el demandante edifica sus pretensiones; o el simple señalamiento de las causas materiales, en criterio de quien imputa, que guardan inmediatez con el hecho y que, se considera, contribuyeron desde el punto de vista físico a la concreción del daño. En tanto que las segundas imputaciones, las jurídicas, aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones (constitucionales, legales, administrativas, convencionales o contractuales) en las cuales se plasma el derecho de reclamación (...).” (Se destaca)

En las condiciones anotadas, se repite que no existe prueba alguna que en forma **contundente e irrefutable** atribuya a la vía la causa de la colisión pues de conformidad con la reiterada y pacífica jurisprudencia del Consejo de Estado⁸, para que se configure una falla en el servicio, se hace necesaria la existencia de tres (3) elementos fundamentales: “(...) **1) el daño antijurídico sufrido por el interesado, 2) la falla del servicio propiamente dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, 3) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio (...).**”

En este asunto no se encuentran probados en forma clara, precisa y contundente los elementos de la falla en el servicio, pues no se prueba en forma alguna el **nexo de causalidad** entre el accidente, el daño alegado y la actuación u omisión que se le pudiere achacar al Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Como se ha venido diciendo, el accidente es consecuencia de una maniobra de conducción irresponsable atribuible inicialmente al conductor del tractocamión, quien invadió el carril contrario sin guardar la precaución del caso propiciando con su conducta la colisión de los dos vehículos, pero también por la falta de idoneidad, experiencia y pericia del conductor de la moto que ya sabemos no tenía licencia para maniobrar la motocicleta, lo que indica, que no puede atribuirse responsabilidad al Invias por cuenta de hechos y conductas de terceros ajenos a la entidad que represento.

Esta situación quedó debidamente consignada en el Informe de Accidente de Tránsito suscrito por SI JORGE FERNANDEZ (quien atendió el accidente) que la referencio respecto del vehículo No. 2 (tractocamión) con el No. **157**, la cual según la Resolución 111268 de 2.012 “*Por la cual se adopta el nuevo Informe Policial de*

⁸ Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), de Lino Antonio Amortegui Guzmán vs. Nación – Ministerio de Defensa).

Accidentes de Tránsito (IPAT), su Manual de Diligenciamiento y se dictan otras disposiciones” corresponde a “No estar pendiente de la vía y de las acciones de los demás usuarios”, actuación traducida en la invasión sin precaución del carril contrario por el que se desplazaba la motocicleta.

El estado de la vía no es el causante del accidente, ya que como se lee en el citado informe el estado de aquella era bueno para el momento de ocurrencia de los hechos, asimismo, la vía estaba correctamente demarcada y a pesar de que para el momento de los hechos estaba lloviendo tenía buena iluminación artificial.

El accidente ocurre, y se repite de manera insistente, porque el conductor del tractocamión realizó una maniobra de conducción imprudente – invadió el carril contrario - sin precaver que por este transitaba una motocicleta, maniobra ejecutada de manera repentina y sin indicación, por lo tanto, el resultado lesivo le es atribuible únicamente a quien tenga la guarda y custodia del vehículo porque se insiste existió una maniobra de conducción imprudente que fue la que terminó de manera eficiente la ocurrencia del siniestro y propició la colisión de los vehículos.

Se reitera que el Consejo de Estado ha señalado que la causa eficiente es lo que se considera como fundamento u origen de algo; en tal sentido basta la verificación de la relación antecedente-consecuente para que pueda sostenerse que un hecho es productor y otro el producido, uno el engendrante y otro el engendrado.

De manera tal que, aterrizando dicha argumentación al caso concreto, se tendría que entrar a dilucidar cuál es la relación existente en la cadena de situaciones planteadas en la demanda, a saber, iniciando por la más importante, la conducción imprudente de quien manejaba el tractocamión, seguidamente de la invasión de carril y la impericia del conductos de la moto, cuál de todas estas situaciones terminó por generar el accidente reclamado.

Para esta defensa, tal y como se ha venido señalando de manera insistente, es claro que la responsabilidad en la colisión de los dos vehículos recae sobre el conductor del tractocamión, pues está probado que aquel invadió de manera irresponsable el carril contrario causando con ese actuar el accidente.

Así las cosas, en lo que va del proceso no está demostrada la existencia de falla en el servicio reclamada y que pueda serle atribuida a esta entidad, pues para que ésta se estructure debidamente se hace necesaria la concurrencia de los tres (3) supuestos de que trata el artículo 90 superior: **i)** la actuación de la administración, **ii)** el nexo de causalidad, y **iii)** un daño causado imputable a la susodicha administración; aquí, como ya se manifestó reiteradamente, no existe relación de

conexidad entre los hechos planteados en la demanda, el daño alegado y la actuación del INVIAS.

Ahora bien, no se puede afirmar, tal y como se plantea en la demanda que el accidente se presenta por falta de señalización, demarcación, por falta de mantenimiento de la vía nacional, incluso, por la supuesta estrechez de la berma, pues se repite, el siniestro se presentó por la acción independiente del conductor del tractocamión que de manera descuidada y si guardar las medidas de seguridad del caso invadió el carril contrario por el cual venía la motocicleta con la que finalmente colisionó en uno de los lados, siendo esta la conducta que propició y/o determinó de manera eficiente la producción del hecho dañoso.

Se destaca una vez más que aunque no es el caso que aquí se estudia y se contesta que en tanto que así no hubiera señalización o demarcación en la vía, los demandantes tampoco acreditan que fuera esta la causa eficiente del accidente, máxime cuando el Código Nacional de Tránsito tiene previstas reglas que deben acoger y respetar todos quienes conducen un vehículo, así existan o no demarcaciones en la vía, sin que el desconocimiento de ellas lleve a determinar o generar de facto responsabilidad en este caso del Invias.

Se traen una vez más en mención el pronunciamiento expuesto por el Tribunal Administrativo del Cauca⁹ que una de sus providencias y sobre el particular refirió lo siguiente:

“Significa lo dicho que, el hecho de la falta de señalización en el sitio del accidente, de modo alguno facultaba a los conductores del tractor y de la motocicleta a realizar maniobras imprudentes, bajo la premisa errada de que el ejercicio de la conducción única y exclusivamente lo rigen las señales de tránsito presentes en la vía, puesto que como quedó visto, el Código Nacional de Tránsito ha previsto algunas reglas que se aplican, independientemente de que exista señalización o no, y el desconocimiento de las mismas por parte de terceros ajenos a la administración no puede generar responsabilidad en ésta última.

(...)

Teniendo de presente los hechos probados arriba relatados, y la contextualización de éstos con las normas de tránsito referidas, no puede llegarse a conclusión distinta a la de que en el sub judice no se configura el nexo de causalidad entre el daño sufrido por la parte actora y la falla en el servicio que se le atribuye al Municipio de Miranda; toda vez que la falta de señalización por parte de esa entidad territorial no fue la causa eficiente de la ocurrencia del

⁹ Sentencia de 27 de julio de 2012, radicado 2007 00082 00, con ponencia de la doctora Carmen Amparo Ponce.

accidente, en tanto los conductores de los vehículos colisionados debían de todas formas detenerse preventivamente a verificar si había uno que tuviera prelación por venir desde la derecha.

Lo anterior conduce a esta Sala de decisión a concluir que, frente al Municipio de Miranda, no hay una adecuada relación de causalidad respecto de los hechos que dieron lugar al daño y los perjuicios alegados por la parte demandante, en tanto, a pesar de la no existencia de la señalización, era obligación del conductor del tractor y de los motociclistas respetar las normas de tránsito preestablecidas, siendo el primero el causante principal del accidente y los segundos favorecedores de las condiciones del mismo. Luego entonces, no puede atribuirse responsabilidad administrativa a esta entidad territorial, bajo los hechos y conductas de terceros ajenos a ella.

Así las cosas, se comprende que están probadas la concurrencia de las eximentes de responsabilidad del hecho de un tercero -atribuible al conductor del tractor-, y de culpa de la víctima, toda vez que los motociclistas transitaban a alta velocidad sin los elementos protectores reglamentarios, que rompen el nexo causal entre la falla atribuida y el perjuicio ocasionado al demandante. Situación de la que se desprende la negación de las pretensiones en contra del Municipio de Miranda – Cauca.”

Esta conclusión no resulta caprichosa pues ha sido la posición reiterada también del Consejo de Estado quien también ha expuesto sobre el particular lo siguiente:

“En gracia de discusión, en este caso particular, la falta de señalización del sitio en el que se produjo el accidente, por sí sola, no permite deducir responsabilidad de las entidades demandadas, como quiera que no se tiene conocimiento sobre la forma cómo ocurrió el accidente, mucho menos sobre la conducta que habrían adoptado las personas implicadas en él.

De todo lo afirmado por los actores, lo único cierto son las lesiones del señor José Arialdo Naranjo como consecuencia de un accidente de tránsito en la carretera que comunica a la ciudad de Yopal con la de Aguazul, en el Departamento del Casanare; sin embargo, del exiguuo material probatorio recaudado en el plenario, no es posible inferir que las lesiones del citado señor obedecieran a una falla del servicio imputable a las demandadas, pues, como se dijo atrás, ni siquiera hay forma de saber cómo ocurrió el accidente.

Puede concluirse, entonces, que en el sub judice las escasísimas pruebas obrantes en el plenario resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad de las entidades demandadas. Se requería, además, acreditar cuál fue la conducta

omisiva en la que habrían incurrido las entidades demandadas, y si ésta fue la causante del accidente que involucró un vehículo particular y una motocicleta, pero además era necesario acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente. Nada de eso se encuentra probado en el proceso, razón por la cual no podrán prosperar las pretensiones de la demanda”¹⁰.

Se recuerda que la imputación del daño es un elemento que permite atribuir responsabilidad al Estado, para lo cual es forzoso que quede plenamente probada la relación de causalidad ente el hecho dañoso y la actividad desplegada por sus agentes, como causa eficiente y determinante, cosa que aquí se extraña pues la parte actora se quiere hacer valer de circunstancias hipotéticas para buscar una responsabilidad que no existe respecto de la ocurrencia del accidente que solo le es reclamable al conductor de camión implicado ello de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado¹¹, razón por la cual los hechos acaecidos eran imprevisibles e irresistibles a las entidades aquí demandadas.

No sobra insistir en poner de presente al Despacho que la conducción de vehículos constituye una actividad peligrosa que por su naturaleza exige que quien la ejerza incremente sin reparo las medidas de precaución a efectos de garantizar su integridad y la de los demás usuarios de las vías.

Tenemos que el conductor del vehículo pesado en el accidente inobservó las disposiciones contenidas en la Ley 769 de 2.002 tales como la contenida en el artículo 55¹², que establece que todos los conductores de vehículos deben comportarse de forma que no obstaculicen, perjudique **o ponga en riesgo a los demás ciudadanos**, así mismo, la contenida en el artículos 61¹³, que señala que, mientras el vehículo se encuentre en movimiento, **todo conductor debe abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad de la conducción**, respetando, por ejemplo, la integridad de los demás usuarios de la vía o lo que es igual no realizar maniobras altamente irresponsables y peligrosas que pongan en peligro a las demás personas vr gr adelantamientos y ocupación del carril contrario.

Resulta indiscutible que el comportamiento que propició e incrementó el riesgo fue el comportamiento del conductor del tractocamión, ya que materialmente la maniobra realizada, invasión de carril, fue el factor determinante y exclusivo en la

¹⁰ Consejo de Estado-Sección Tercera, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, Sentencia del 22de abril de 2009, radicado: 85001-23-31-000-1995-00099-01 (16192), actor: José Arialdo Naranjo y otros.

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 19287, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

¹² “**Artículo 55.** Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito”.

¹³ “Artículo 61. Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento”.

producción del daño, de ahí que no pueda pretenderse realizar una imputación en el plano fáctico a la entidad que represento pues ya se ha recalcado, la vía no fue la causante del accidente pues esta estaba en buen estado y con la debida demarcación y señalización.

En relación con el concepto de la causa eficiente del daño, se itera que ha sido el Consejo de Estado¹⁴ citando doctrina acerca del tema, el que ha señalado que **la causa eficiente es lo que se considera como fundamento u origen de algo**; en tal sentido basta la verificación de la relación antecedente-consecuente para que pueda sostenerse que un hecho es productor y otro el producido, uno el engendrante y otro el engendrado.

Aquí estas situaciones están claras y permiten concluir que fue un acto imprudente de conducción atribuible a un tercero y no la vía la que causó la colisión entre los vehículos.

Así pues, no existe actuación de la administración ni por vía de acción ni por vía de omisión, por ello se asevera como razón de la defensa que no se puede hablar de un daño causado por una actuación del INVIAS, y mucho menos de un posible nexo de causalidad, entre el dicho daño y la actuación de la administración, pues se debe entrar primero a evaluar las circunstancias propias que llevaron a que la motocicleta en la que se movilizaban los demandantes colisionara con el tractocamión, circunstancias que son claras y que están determinadas en un informe policial que da cuenta de la manera como se presentó el accidente.

Al no estar probado que el accidente ocurrió por una causa atribuible a la vía tal y como se afirma en la demanda, no es dable derivar responsabilidad alguna a cargo del Instituto Nacional de Vías, se insiste porque la parte demandante desconoció el postulado contenido en el artículo 167 del C.G.P., que establece la carga probatoria de los hechos o supuestos en cabeza de quien los alega, tanto así que en el presente caso, la imputación fáctica y jurídica son circunstancias que aún no han sido acreditadas.

En conclusión, como quiera que no se encuentran completamente acreditados los elementos de la responsabilidad que se reclama y que no es posible configurar un nexo de causalidad entre el daño reclamado y alguna actuación atribuible al Instituto Nacional de Vías, para estructurar la configuración de una falla en el servicio, se solicita respetuosamente al Despacho que **se declaren probadas las excepciones aquí planteadas** ya que la demanda carece de elementos probatorios claros y contundentes que acrediten que, por parte del Instituto Nacional de Vías INVIAS, se omitió o se falló en el cumplimiento de su deber legal

¹⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Sentencia de fecha 20 de abril del año 2005, Radicación número: 76001-23-31-000-1994-00151-01(14699).

de velar por el correcto estado y señalización de la vía, menos aún que las condiciones de la vía hubieran sido la causa eficiente y determinante de la ocurrencia del accidente reclamado, pues se tiene establecido que fue el acto de conducción descuidada de un tercero lo que originó el siniestro.

8.2. EXCEPCIÓN GENERICA O INNOMINADA

De manera comedida ruego a Ud. Señor Juez, declarar probadas las excepciones que puedan llegar a configurarse durante este proceso y que no hayan sido alegadas como tales en este escrito.

IX. PRUEBAS DE LA CONTESTACIÓN

Con todo respeto solicito al Despacho se sirva decretar y practicar las siguientes, como fundamento de la presente contestación y de las excepciones propuestas:

9.1. Documentales aportados

- Copia del Contrato No. 2017-2016, suscrito con el CONSORCIO AMV CAUCA, cuyo objeto fue la “Administración Vial de las Carreteras nacionales a cargo de Dirección Territorial Cauca, Código 2503 Mojarras – Popayán – Popayán – Sector Mojarras- PR0+0000 – PR121+0000; Código 25CCB Variante de Popayán - Sector Variante de Popayán – PR0+0000 – PR16+0000”. Fecha de inicio: 26 de noviembre 2.016. Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2.018.
- Copia del Contrato No. 1950-2016, suscrito con el CONSORCIO CEFIRO MANTENIMIENTO, cuyo objeto fue el “MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYAN PR81+0000 – PR108+0000”. Fecha de inicio: 18 de noviembre 2.016. Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2.018.
- Copia del Contrato No. 792 de 2017, suscrito con EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S., cuyo objeto fue el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS - POPAYAN, RUTA 25, TRAMO 2503, ENTRE LOS PR0+0000 AL PR121+0000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Fecha de inicio: 25 agosto 2.017- Plazo: Cinco (5) meses. Fecha de vencimiento: 24 enero 2.018.
- Copia del Contrato No. 914 de 2017, suscrito con el CONSORCIO AJM, cuyo objeto fue la “INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 25 TRAMO 2503 ENTRE LOS PR0+0000 AL PR121+0000 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Fecha

de inicio: 25 agosto 2.017. Plazo: Cinco (5) meses. Fecha de vencimiento: 24 enero 2.018.

9.3. Prueba Testimonial:

Solicito a la Honorable Juez de conocimiento, se sirva citar y hacer comparecer con las formalidades de Ley al Ingeniero **BLAS URIEL PAEZ CHINCHILLA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.360.828 de Ocaña - Norte de Santander, para que en audiencia pública de pruebas declare sobre todo lo que le conste respecto de todos y cada uno de los 21 hechos planteados en la demanda, algunos de ellos en los cuales se endilga al Invias responsabilidad en el accidente supuestamente por omitir el cumplimiento de sus obligaciones para con la vía, asimismo, para que declare sobre las particularidades de los contratos ejecutados para la fecha de los hechos y en general sobre la contratación e inversión efectuada a lo largo del tiempo en esta vía.

El ingeniero puede ser citado a través de la Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, en la Autopista 25 N con carrera 9 Esquina (Frente a Torres del Río - Antiguo Distrito de Obras Públicas No. 6 de Popayán), o a través del suscrito en el mismo lugar. El correo institucional del ingeniero es bpaez@invias.gov.co.

X. ANEXOS

1. Poder debidamente otorgado.
2. Resolución No. 06479 del 19 de diciembre de 2.013, por la cual se nombra al ingeniero JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON como Director Territorial del Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca.
3. Acta No. 00723 de 19 de diciembre de 2.013, mediante la cual el ingeniero JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON, tomó posesión como Director Territorial.
4. Resolución No. 08121 del 31 de diciembre de 2.018, que contiene la delegación de funciones del Director Territorial.
5. Certificación de desempeño del cargo del ingeniero JOSÉ ADRIAN VALENCIA CASTRILLÓN, como Director Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías
6. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

XI. NOTIFICACIONES

A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., identificada con el Nit. No. 891700037-9, a través de su representante legal, en la Carrera 14 No. 96-34 Bogotá D.C., o en el *email* de notificación judicial njudiciales@mapfre.com.co.

El suscrito y mí representado en la sede de la Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, ubicada en la ciudad de Popayán en la Autopista 25 N con carrera 9 Esquina (Frente a Torres del Río - Antiguo Distrito de Obras Públicas No. 6 de Popayán).

El correo del Instituto Nacional de Vías para **notificaciones judiciales** es: **njudiciales@invias.gov.co**.

Solicito de manera comedida que los enlaces, según la herramienta de comunicación virtual que se utilice para surtir las diferentes audiencias virtuales que se tengan que desarrollar en el trámite del proceso, sean enviados a mi correo institucional hgalvis@invias.gov.co.

De la honorable Juez atentamente,

Atentamente,



HENRY GALVIS DOMINGUEZ.
C.C. No. 76.331.526 de Popayán.
T.P. No. 231257 del C. S. de la Judicatura.
hgalvis@invias.gov.co - Teléfono: 3007871047

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO SIETE (7)

PLAZO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018

VALOR: NOVECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$903.457.300) INCLUIDO IVA

CONSULTOR: CONSORCIO AMV CAUCA, NIT. 901.024.069-1 (integrado por JOSE MARINO RENDON MUÑOZ, C.C. 10.690.175 con un porcentaje de participación del 60%, JAVIER VALDERRAMA YAGUE C.C. 12.231.611 con un porcentaje de participación del 20% y CONSULTORES CIVILES-AMBIENTALES & CONTABLES S.A.S. NIT 900.747.348-9 con un porcentaje de participación del 20%)

CONTRATO NÚMERO 02017 DE 2016. Entre los suscritos **ADOLFO ANDRES PARODI TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía número 7'601.450, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de Director de Contratación, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución No. 03402 del 23 de Mayo de 2016 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra **JOSE MARINO RENDON MUÑOZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 10.690.175 expedida en Patía (El Bordo- Cauca), obrando en nombre y representación del **CONSORCIO AMV CAUCA**, en su calidad de representante, según carta de información del Consorcio (anexa) del 15 de Septiembre de 2016, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará **EL CONSULTOR**, hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número 07607 del 31 de octubre de 2016, previo Concurso de Méritos No.CMA-DO-SRN-057-2016 contrato que se regirá por las estipulaciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 sus normas reglamentarias y las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.-** EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO SIETE (7), de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, la propuesta técnica y económica presentada por EL CONSULTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO y el Acta de Acuerdos Alcanzados del 27 de Octubre de 2016. **PARAGRAFO PRIMERO:** Las vías, sectores y longitudes objeto del presente contrato son las determinadas en el numeral 1.2 del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La longitud real contratada podrá variar hasta en un 10% con respecto a la longitud estipulada en los Pliegos de Condiciones, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin que implique modificación al valor del contrato. **PARAGRAFO TERCERO:** EL CONSULTOR asume los riesgos previstos en la matriz de riesgos que hace parte del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos Abierto. **CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.-** El alcance de las actividades técnicas y administrativas y las obligaciones del CONSULTOR son las que se indican en el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos y en especial en el numeral 8.18 del mismo. **PARÁGRAFO:** Para el cumplimiento de las funciones de Interventoría que le corresponden al CONSULTOR, éste deberá observar el Manual de Interventoría vigente expedido por EL INSTITUTO. **CLÁUSULA TERCERA: INFORMES.** - Además de los informes y otros documentos a que se hace referencia el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos y el Manual de Interventoría, EL CONSULTOR deberá presentar los informes a que hace referencia el numeral 8.29 del Pliego de Condiciones. **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.-** Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de NOVECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$903.457.300) INCLUIDO IVA equivalentes a 1.310,39 salarios mínimos legales mensuales vigentes. **PARAGRAFO PRIMERO:** El valor del presente contrato se distribuye por vigencias fiscales de la siguiente manera: a) **Vigencia 2016:** La suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

02017

MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$64.849.800) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. **b) Vigencia 2017:** La suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$547.714.300.) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. **c) Vigencia 2018:** La suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (\$290.893.200) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. **PARAGRAFO SEGUNDO: AJUSTES.-** Los valores propuestos por el CONSULTOR no serán objeto de ajustes. **CLAUSULA QUINTA: APROPIACION PRESUPUESTAL.-** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma NOVECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$903.457.300)) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera: **a)** SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$778.842.500) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor básico de la consultoría, suma que incluye los costos directos y de personal derivados de la ejecución de la consultoría. **b)** CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$124.614.800) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 119816 del 8 de marzo de 2016 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del IGNSITITUTO, del cual se reservará la suma de \$64.849.800. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio con Referencia No. 2-2016-029937 del 18 de agosto de 2016, suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con número de autorización SIIF Nación 40716 del 18 de Agosto de 2016 en las cuales se reservarán las siguientes sumas: **vigencia 2017** \$547.714.300 y **vigencia 2018** \$290.893.200. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SRN-76590 del 4 de noviembre de 2016. **CLAUSULA SEXTA: PLAZO.-** El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2018, a partir de la fecha de la Orden de Iniciación que impartirá el Director Territorial del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA SEPTIMA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.-** El INSTITUTO pagará al CONSULTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: **1. COSTOS POR SALARIOS:** **a)** Sueldos efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. **b)** Un Factor Multiplicador (incluido el factor de honorarios) de 2,4 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos. **2. COSTOS DISTINTOS A SALARIOS:** Aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR. **CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO:** El INSTITUTO pagará al CONSULTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del Consultor y el Supervisor. En todo caso tales pagos de Consultoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL CONSULTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el CONSULTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al CONSULTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2., del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el

anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al CONSULTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al CONSULTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. El Instituto verificará a través del Supervisor del contrato, que los costos de personal pagados por EL INSTITUTO, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto para lo cual EL CONSULTOR presentará cada tres meses la relación de los pagos efectuados a los costos de personal de Administración Vial vinculado al proyecto, debidamente firmados por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal.

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 3662 de 2007, si el CONSULTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.

PARAGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA: Para el pago de las Actas mensuales de costos, el CONSULTOR presentó certificación del 10 de Noviembre de 2016 expedida por BBVA, con la siguiente información bancaria: Cuenta de Ahorros No.721539245, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO.- Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el INSTITUTO entregará un anticipo de hasta el diez por ciento (10%) del valor básico del contrato, de conformidad con la disponibilidad presupuestal para la vigencia fiscal 2016, el cual se tramitará previa solicitud del CONSULTOR y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el Ordenador del Pago debe autorizar el pago en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por el consultor para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de Inversión Mensualizado de Anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONSULTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del CONSULTOR o quien este delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONSULTOR, serán reintegrados al tesoro público cada mes, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO.

PARAGRAFO TERCERO: AMORTIZACION.- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el CONSULTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser controlada por el Supervisor.

CLAUSULA DECIMA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.- Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONSULTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONSULTOR reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d) Calidad del servicio, por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONSULTOR deberá ajustar la

126

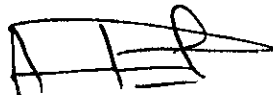
Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. **PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.-** EL CONSULTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONSULTOR, sus subcontratistas o dependientes. **PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.-** EL CONSULTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONSULTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VIGILANCIA.-** La vigilancia del presente contrato será realizada por el Director Territorial del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá las funciones de Supervisor del Contrato. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN Ó MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL POR ENTRADA EN VIGENCIA DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN O DE MANTENIMIENTO INTEGRAL O ENTREGA DE LA VÍA A OTRA ENTIDAD:** Cuando se suscriban contratos de concesión y/o Mantenimiento Integral, que afecten en forma total el sector entregado al Administrador Vial, el CONSULTOR acepta con la presentación de la oferta y con la firma del presente contrato, que el contrato de Administración Vial terminará automáticamente cuando este hecho se produzca. En el caso en que se suscriban convenios o se expida cualquier otro documento que implique transferencia o entrega de la vía a otra entidad que afecte en forma total o parcial el sector entregado al CONSULTOR, este acepta con la presentación de la oferta y con la firma del contrato, que el contrato para la Administración Vial terminará o se modificará automáticamente cuando este hecho se produzca. La terminación del contrato por esta causa, de ninguna manera representa para el CONSULTOR la posibilidad de reconocimiento de valor alguno a título de indemnización o desequilibrio financiero del contrato, como tampoco, obligación del INSTITUTO por el pago de estos conceptos, por cuanto se trata de una situación conocida, prevista y aceptada por el CONSULTOR desde el momento mismo de la apertura del proceso de contratación y tenida en cuenta y evaluada por el proponente desde la presentación de la oferta. Para el efecto de la terminación automática del contrato de Administración Vial, bastará con la ocurrencia del hecho y la notificación que haga el INSTITUTO al CONSULTOR sobre esta situación. Conocida la adjudicación del Contrato de Concesión o de Mantenimiento Integral o la transferencia o entrega de la vía, el INSTITUTO notificará al CONSULTOR quien tendrá como fecha de terminación de su contrato la fecha fijada por el INSTITUTO para la entrega de la carretera al Concesionario o CONTRATISTA o Entidad. Una vez notificada la terminación del contrato por parte del INSTITUTO se procederá a la liquidación del mismo por mutuo acuerdo entre las partes. En el evento en que el contrato de Concesión o de Mantenimiento Integral o suscripción de convenio o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a otra Entidad otorgado por el INSTITUTO afecte en forma parcial los sectores de carretera que se encuentran en Administración Vial, el CONSULTOR acepta que se reduzca el alcance de su contrato en estos sectores y manifiesta que ello no afecta el equilibrio financiero del contrato ni causa indemnización alguna a su favor, pues conoce esta situación y la ha considerado y evaluado para la presentación de la oferta. En el caso de modificación, el INSTITUTO notificará al CONSULTOR sobre el hecho, indicando los sectores que se afectan con la concesión o con el Contrato de Mantenimiento Integral o suscripción de convenio o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a otra Entidad. Con esta notificación se entenderá formalizada la modificación. Las anteriores situaciones, no darán derecho a reclamación administrativa o judicial alguna por parte del CONSULTOR. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN.-** El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para la liquidación se exigirá al CONSULTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Si el CONSULTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONSULTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación

02017

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.-** Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio de consultoría, el Director Territorial expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.-** El CONSULTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del presente Contrato. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.-** Las disposiciones contenidas en el capítulo denominado CONDICIONES DEL CONTRATO del Pliego de condiciones del concurso de méritos, hacen parte integrante del presente documento. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.-** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por el CONSULTOR Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

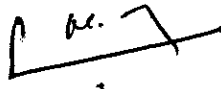
22 NOV 2016

POR EL INSTITUTO:



ADOLFO ANDRES PARODI TORRES
Director de Contratación

POR EL CONSULTOR:



JOSE MARINO RENDON MUÑOZ
Representante
CONSORCIO AMV CAUCA

Vo.Bo. Minuta: Soledad Castro Abogado DC

Vo. Bo.Minuta: Luz Elena Rendón Gómez. Coordinadora DC



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
N.I.T. 800.215.807-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYAN, PR81+0000 - PR108+0000.

VALOR: QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$ 512.733.959,00) M/CTE. (INCLUYE IVA)

PLAZO: HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO CEFIRO MANTENIMIENTO.- NIT. 900.980.946-0 (Integrado por: Cooperativa de Trabajo Asociado CURIACAO - Nit. 900.019.126-8, con una Participación del 25% y El CEFIRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.- Nit. 900.651.508-7, con una Participación del 75%) Representado Legalmente por el señor: GUSTAVO DORADO CABRERA.

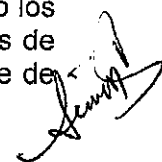
CONTRATO No. 4.1950 DE 2016. Entre los suscritos, JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.311.695 expedida en Popayán, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Cauca, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de Diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 del 20 de Noviembre de 2013, y facultado al respecto por la Resolución 06479 del 19 de Diciembre de 2013 y 01611 del 25 de Marzo de 2014, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, GUSTAVO DORADO CABRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 4.751.326 expedida en Rosas Cauca, obrando en nombre y representación del "CONSORCIO CEFIRO MANTENIMIENTO", identificado con número de NIT. 900.980.946-0, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni el CONSORCIO al que representa, se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 206 del 11 de noviembre de 2016, previa Licitación Pública Número LP-DT-CAU-001-2016, contrato que se registrará por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias, y las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA: MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYAN, PR81+0000 - PR108+0000., de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva Licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- El valor de este contrato se estima en la suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$ 512.733.959,00) M/CTE., suma que incluye el IVA, equivalentes a setecientos cuarenta y tres punto sesenta y ocho (743.68) salarios mínimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.- El presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. PARAGRAFO SEGUNDO: AJUSTES.- El contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes. CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a reservar para el

presente contrato la suma de **QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$ 512.733.959,00) M/CTE.**, discriminada así: a) **Costo básico de las obras:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOCE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS (\$442.012.034,00) M/CTE, b) **Impuesto al valor agregado IVA de las obras:** SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 70.721.925,00) M/CTE. **PARAGRAFO PRIMERO:-** Los anteriores valores de discriminan de la siguiente manera:

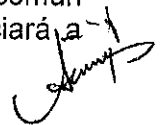
RESPALDO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR
Certificado Disponibilidad Presupuestal: 152316 del 02 de mayo 2016	2016	COSTO BÁSICO DE LAS OBRAS	\$ 41.691.262,00
		I.V.A (16% DEL AIU)	\$ 6.670.602,00
		TOTAL VIGENCIA 2016	\$ 48.361.864,00
Aprobación Vigencias Futuras: Oficio. 5.2.1 con radicado No. 2-2016-029937 de fecha 18 de Agosto de 2016	2017	COSTO BÁSICO DE LAS OBRAS	\$ 261.474.262,00
		I.V.A (16% DEL AIU)	\$ 41.835.881,00
		TOTAL VIGENCIA 2017	\$ 303.310.143,00
Aprobación Vigencias Futuras: Oficio. 5.2.1 con radicado No. 2-2016-029937 de fecha 18 de Agosto de 2016	2018	COSTO BÁSICO DE LAS OBRAS	\$ 138.846.510,00
		I.V.A (16% DEL AIU)	\$ 22.215.442,00
		TOTAL VIGENCIA 2018	\$ 161.061.952,00

PARAGRAFO SEGUNDO:- Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número **152316 del 02 de mayo 2016**, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO. **PARAGRAFO TERCERO:** Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según la siguiente información: **1)** número de oficio de autorización de vigencias futuras: Oficio. 5.2.1 con radicado No. 2-2016-029937 de fecha 18 de Agosto de 2016, de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **2)** Código del Rubro Presupuestal: 2401-600-29 Conservación de Vías a través de Microempresas y Administradores Viales. **3)** Fuente de Financiamiento: Para el año 2017 y 2018, por Recursos Propios. **4)** Número de Autorización SIIF NACIÓN: 40716. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO.-** El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el **30 de junio de 2018**, contados a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo y aprobación de los documentos de información para el control de la ejecución de la obra previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.-** El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra de igual valor, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Administrador Vial, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. **PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.-** Para el pago de las Actas mensuales de obra, EL CONTRATISTA presentó una certificación bancaria con la siguiente información: cuenta de Ahorros No. **196000812327**, expedidos por la entidad financiera DAVIVIENDA, para que el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera del INSTITUTO abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.-** Las actas de Obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta

de Recibo definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. **PARAGRAFO TERCERO:** De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta. **CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO.-** EL INSTITUTO entregará un anticipo máximo del diez por ciento (10%) del valor básico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado en el proceso de Licitación Pública. Este anticipo se girará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se radicará el formato correspondiente para el trámite con sus respectivos anexos. El anticipo concedido estará destinado exclusivamente a la adquisición de overoles insignia y herramientas de trabajo. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). **PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.** Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el cual será vigilado por el Administrador Vial. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Administrador Vial, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversión del anticipo aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con la reglamentación al respecto, en particular con el Manual de Interventoría. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Administrador Vial y/o el Jefe de la Unidad Ejecutora. **PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO.-** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados cada mes a la Tesorería del INSTITUTO, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. **PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.-** Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera e informa a esta el detalle de la consignación. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, serán reintegrados al CONTRATISTA. **PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO.-** El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por el Administrador Vial. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el Administrador Vial. **PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.-** El CONTRATISTA presentará al Grupo de Tesorería del INSTITUTO una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. **PARÁGRAFO SEXTO:** La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El INSTITUTO a través de la interventoría revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría. **PARAGRAFO SÉPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO.-** Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: **1)** El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. **2)** EL CONTRATISTA entregará al INSTITUTO y al Administrador Vial copia del contrato de fiducia. **3)** El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. **4)** Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del programa de inversión del mismo aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. **5)** Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes de recursos de anticipo si los hubiere, deberán ser reintegrados al INVIAS en la forma prevista en el acápite de



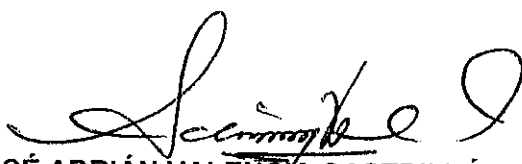
ANTICIPO del presente documento. 6) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa autorización del INVIAS. 7) La Unidad Ejecutora del INVIAS remitirá a la entidad fiduciaria el programa de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reinicios de la ejecución del contrato. 8) En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará al INVIAS los recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una vez este comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 9) La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora del INVIAS, al Administrador Vial y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. **CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.**- Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente: a) **El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria** que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, b) **El buen manejo y correcta inversión del anticipo** concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, c) **El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal** que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. **PAGRAFO PRIMERO:** Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. **PAGRAFO SEGUNDO:** Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. **PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.**- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. **PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.**- EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. **CLAUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.**- El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA, el INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. **PARAGRAFO PRIMERO:** En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. **PARAGRAFO TERCERO:** Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. **PARAGRAFO CUARTO:** El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA NOVENA: LIQUIDACION.**- El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del aso, e iniciará a




contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. **PARAGRAFO TERCERO.-** Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el formato MSE-FR 27 establecido en el Manual de Interventoría o aquel que lo modifique o sustituya. **CLAUSULA DECIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.-** El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA). **DECIMA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.** - Las disposiciones contenidas en el capítulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del Pliego de condiciones del proceso de Licitación Pública No. LP-DT-CAU-001-2016, hacen parte integrante del presente documento. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCION.-** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su legalización y ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato.

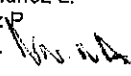
Para constancia se firma en Popayán, a los 11 NOV 2016

POR EL INSTITUTO:


JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
 Director Territorial Cauca

POR EL CONTRATISTA:


GUSTAVO DORADO CABRERA
 C.C. 4.751.326 de Rosas Cauca
 Representante Legal CONSORCIO CEFIRO MANTENIMIENTO

Elaboró: María Yarli Muñoz L.
 Revisó: Blas Uriel Pez P
 Vo. Bo.: Abogada (o). 

OBJETO: "INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS – POPAYAN RUTA 25 TRAMO 2503 ENTRE LOS PR 0+0000 AL PR 121+0000 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VALOR: TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$327.125.954,00) INCLUIDO IVA

INTERVENTOR: **CONSORCIO A J M** NIT. 901.103.645-1 (Integrado por **ALVARO PASAJE SALCEDO** C.C 5.209.801 con un porcentaje del 60%, **JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA** C.C. 12.976.091 con un porcentaje del 20% y **MIRS LATINOAMERICA S.A.S** NIT. 900.241.875-6 Con un porcentaje del 20%).

CONTRATO NÚMERO 00914 DE 2017. Entre los suscritos **JUAN JOSE OYUELA SOLER**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.076.098 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de **DIRECTOR DE CONTRATACION (E)** según Resolución No. 05779 del 02 de Agosto de 2017 y Acta de Posesión No. 00252 del 03 de Agosto de 2017, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 01611 del 25 de Marzo de 2014, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra **ALVARO PASAJE SALCEDO**, identificado con cédula de ciudadanía número 5.209.801 expedida en Alban, obrando en nombre y representación del **CONSORCIO A J M**, en su calidad de representante según carta de información del Consorcio, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, representado para la firma del presente documento por **PEDRO MARIA GALVIS SANCHEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 3.180.057 de Sopó, según poder otorgado el 27 de Julio de 2017, ante la Notaria Primera del Círculo de Pasto(E), y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número 05731 del 03 de Agosto de 2017, previo Concurso de Méritos No. **CMA-DO-SRN-036-2017**, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 sus normas reglamentarias y las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.-** EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar la INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS – POPAYAN RUTA 25 TRAMO 2503 ENTRE LOS PR 0+0000 AL PR 121+0000 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoría, la propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO y acta de acuerdos firmada del 31 de Julio de 2017. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.-** Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$327.125.954,00) M/CTE, incluido IVA, equivalentes a 443.43 salarios.

minimos legales mensuales vigentes. **PARAGRAFO: AJUSTES.-** El contrato de interventoría no se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el formulario No.1 del Concurso de Méritos. **CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL.-** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$327.125.954,00) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera: a) DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$274.895.760,00) M/CTE, para el pago del valor básico y ajustes de la interventoría, suma que incluye los costos directos y de personal derivados de la ejecución de la interventoría. b) CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$52.230.194,00) M/CTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 88317 del 09 de Febrero de 2017, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará a suma de \$327.125.954,00. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO.-** El plazo para la ejecución del presente contrato será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA QUINTA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.-** El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: **1. COSTOS POR SALARIOS Y HONORARIOS:** a) Sueldos efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un Factor Multiplicador de 2.36 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y los honorarios del INTERVENTOR. **2. COSTOS DISTINTOS A SALARIOS:** Aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR. **CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO:** El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el

derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. **PARAGRAFO PRIMERO:** De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 3662 de 2007, si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta. **PARAGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA:** Para el pago de las Actas mensuales de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 09 de Agosto de 2017 expedida por BANCOLOMBIA, con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 997-804973-61, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. **CLAUSULA SEPTIMA: ANTICIPO.-** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y presentación del plan de manejo del anticipo, EL INSTITUTO podrá autorizar un anticipo de hasta el VEINTE por ciento (20%) del valor básico del contrato, previa solicitud del INTERVENTOR en el formato establecido para tales efectos y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el programa anual mensualizado de caja PAC. **PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.-** Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá contener: el número del contrato, objeto, Nit del Interventor, nombre del interventor y sus representantes. Además deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria). **PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.-** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. **PARÁGRAFO TERCERO:** La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la Interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo. **PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN-** El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo EL INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el Supervisor. **CLAUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.-** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

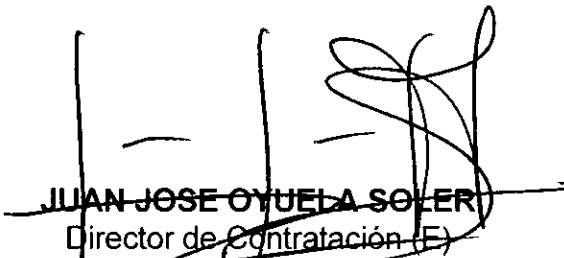
b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato. **PARAGRAFO PRIMERO:** Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. **PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.-** EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes. **PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.-** EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. **CLAUSULA NOVENA: VIGILANCIA.-** La vigilancia del presente contrato será realizada por el Director Operativo, del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá las funciones de supervisor del contrato de interventoría. **PARÁGRAFO:** El Director Operativo en la sede central del INSTITUTO designará un Gestor Técnico del Proyecto. **CLAUSULA DECIMA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.-** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de interventoría. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN.-** El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de




acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.-** Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras y calidad de estudios y diseños según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.-** El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del presente Contrato. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.-** Las disposiciones contenidas en el capítulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del Pliego de condiciones del concurso de méritos, hacen parte integrante del presente documento. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.-** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL INTERVENTOR. Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

.17 AGO 2017

POR EL INSTITUTO:


JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director de Contratación (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

POR EL INTERVENTOR:


PEDRO MARIA GALVIS SANCHEZ
Apoderado
CONSORCIO A J M

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS-POPAYAN, RUTA 25, TRAMO 2503, ENTRE LOS PR0+0000 AL PR121+0000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.298.849.082,00) INCLUIDO IVA

PLAZO: CINCO (5) MESES.

CONTRATISTA: EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S., NIT. 830.132.938-0

CONTRATO NÚMERO 00792 DE 2017. Entre los suscritos **JUAN JOSE OYUELA SOLER**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.076.098 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de **DIRECTOR DE CONTRATACIÓN (E)**, según Resolución No. 02997 del 02 de mayo de 2017, y Acta de Posesión No. 0131 del 02 de mayo de 2017, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 01611 del 25 de marzo de 2014, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO**, por una parte y por la otra, **JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO**, identificado con cédula de ciudadanía número 19.265.798 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación de la sociedad **EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.**, en su calidad de representante legal según Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por Cámara de Comercio de Bogotá el 04 de julio de 2017, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 04945 del 05 de julio de 2017, previa Licitación Pública Número LP-DO-SRN-025-2017, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias, y las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.-** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS-POPAYAN, RUTA 25, TRAMO 2503, ENTRE LOS PR0+0000 AL PR121+0000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.-** El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.298.849.082,00) MONEDA CORRIENTE**, suma que incluye el IVA, equivalente a 3.116,16 salarios mínimos legales mensuales vigentes. **PARAGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del TREINTA Y UN POR CIENTO (31%) discriminado así: Administración del VEINTITRES POR CIENTO (23%), Imprevistos del CINCO POR CIENTO (5%) y Utilidad del TRES POR CIENTO (3%). **PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.-** El presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010. **PARAGRAFO TERCERO:**

AJUSTES.- El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública. **CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL.-** EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.298.849.082,00) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) **Subtotal de las obras:** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$2.152.958.780,00) MONEDA CORRIENTE, b) **Valor provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (incluye obras ambientales del PAGA):** CIENTO NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$109.082.565,00) MONEDA CORRIENTE, c) **Valor Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana:** QUINCE MILLONES PESOS (\$15.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, d) **Impuesto al valor agregado IVA de las obras, ajustes y jornadas 7x24:** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$9.907.737,00) MONEDA CORRIENTE, e) **Valor básico de la actualización y/o elaboración de cálculos estructurales para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera:** DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, f) **Impuesto al valor agregado IVA de la actualización y/o elaboración de cálculos estructurales para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera:** UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1.900.000,00) MONEDA CORRIENTE. **PARAGRAFO PRIMERO:-** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 88017 del 09 de febrero de 2017 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de (\$2.298.849.082,00). **CLAUSULA CUARTA: PLAZO.-** El plazo para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) meses, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos de información para el control de la ejecución de la obra previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.-** EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. **PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.-** Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, EL CONTRATISTA presentó certificación del 30 de junio de 2017 expedida por el Banco de Bogotá con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 077-09894-5 en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.-** Las actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la

cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. **PARAGRAFO TERCERO:** De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta. **CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO.-** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). **PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.-** Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación. **PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.-** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. **PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.-** Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. **PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION.-** El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. **PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.-** EL CONTRATISTA presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. **PARÁGRAFO SEXTO:** La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. **PARÁGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL**

ANTICIPO.- Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: **1)** El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. **2)** El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. **3)** Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. **4)** Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en los párrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. **5)** El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. **6)** La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. **7)** En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. **8)** La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

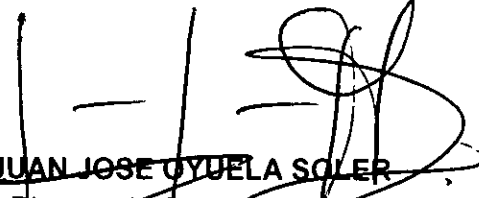
CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.- Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente: **a)** El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. **b)** El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, **c)** El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más, **d)** La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. **e)** Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños, por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños. **PAGRAFO PRIMERO:** Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. **PAGRAFO SEGUNDO:** Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. **PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.-** EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. **PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.-** EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por

razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. **CLAUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.**- El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o EL INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. **PARAGRAFO PRIMERO:** En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. **PARAGRAFO TERCERO:** Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. **PARAGRAFO CUARTO:** El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA NOVENA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.**- En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **CLAUSULA DECIMA: CADUCIDAD.**- El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. **PARAGRAFO PRIMERO:** Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. **PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.**- En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACION.**- El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de

conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación. **PARAGRAFO TERCERO.-** Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.-** Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.-** EL CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA). **CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.-** Las disposiciones contenidas en el capítulo denominado "CONDICIONES DEL CONTRATO" del Pliego de condiciones de la Licitación Pública, hacen parte integrante del presente documento. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.-** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato. Para constancia se firma en Bogotá D. C.,

13 JUL 2017

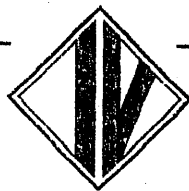
POR EL INSTITUTO:


JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director de Contratación (E)

POR EL CONTRATISTA:


JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO
Representante Legal
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

Elaboró Minuta: Tatiana Amaya Osorio. Abogada DC. 
Vo. Bo. Minuta: Dra. Luz Elena Rendón G. Coordinadora DC. 



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

19 DIC. 2013

Resolución Número

de 2013

(06479)

Por la cual se efectúan unos nombramientos ordinarios en el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 2619 del 20 de noviembre de 2013,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 2619 del 20 de noviembre de 2013, se estableció la planta de personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.

Que se hace necesario efectuar unos nombramientos ordinarios en la planta de personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- en los cargos de Libre Nombramiento y Remoción, por lo que:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar en los cargos de Libre Nombramiento y Remoción de la planta de personal del Instituto Nacional de Vías aprobada mediante el Decreto 2619 del 20 de noviembre de 2013, a los siguientes servidores públicos:

No.	CEDULA	APELLIDOS	NOMBRES	DENOMINACION	CODIGO	GRADO
1	42986784	Arango Viana	María Zohe del Pilar	Secretario General de Entidad Descentralizada	0037	22
2	10255240	Grajales Quintero	German	Director Técnico	0100	22
3	79046357	Alfonso Rincón	Omar Hernando	Director Técnico	0100	22
4	19431826	Jaime Barbosa	Wilson Antonio	Subdirector Técnico	0150	20
5	39648939	Bravo Horta	María Sandy	Subdirector Técnico	0150	20
6	9778219	Jaramillo Montoya	Julio Cesar	Subdirector Técnico	0150	20
7	16260674	Valencia Escobar	Carlos Alberto	Subdirector Técnico	0150	20
8	6761631	Hurtado García	Jorge Hernán	Subdirector Técnico	0150	20
9	23490819	Rivera Peña	Ruth Marlen	Subdirector Administrativo	0150	20
10	40912667	Camargo Curiel	Nulbis Estela	Subdirector Financiero	0150	20
11	8408712	Espinal Monsalve	Juan Manuel	Director Territorial	0042	16
12	15019855	García Sierra	Miguel Antonio	Director Territorial	0042	16
13	73140520	Castilla Tarra	Osbaldo de Jesus	Director Territorial	0042	16
14	6763769	Fernandez Niño	Gustavo Gamaliel	Director Territorial	0042	16
15	10253209	Gutiérrez Cardona	Jorge Ricardo	Director Territorial	0042	16
16	70510383	Ramírez Giraldo	William Augusto	Director Territorial	0042	16
17	9656400	Avella Chaparro	Ricardo Alonso	Director Territorial	0042	16
18	76311695	Valencia Castrillon	José Adrián	Director Territorial	0042	16
19	77192580	Arenas Díaz	Layonel	Director Territorial	0042	16

ES FIEL COPIA DE DOCUMENTO QUE
REPOSA EN LA HOJA DE VIDA

Continuación de la Resolución "Por la cual se efectúan unos nombramientos ordinarios en el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-".

20	11802077	Murillo Palacios	Jhon Oswall	Director Territorial	0042	18
21	88139879	Rodriguez Bayona	Jhonny Alexander	Director Territorial	0042	18
22	19311874	Guerra Bermúdez	Guillermo Francisco	Director Territorial	0042	18
23	12276947	Manrique Castro	Oscar Javier	Director Territorial	0042	18
24	7479134	Gonzalez Fernandez	Freddy Rafael	Director Territorial	0042	18
25	79392522	Leon Ortiz	Jaime Andres	Director Territorial	0042	18
26	12990690	Moran Fernandez	Cesar Enrique	Director Territorial	0042	18
27	13175967	Vergel Lopez	Jesus Edgardo	Director Territorial	0042	18
28	13507742	Jaimes Fernández	Elias	Director Territorial	0042	18
29	18123389	Gonzalez Gudíño	Jairo Edmundo	Director Territorial	0042	18
30	7521748	Meza patíño	Alfonso	Director Territorial	0042	18
31	4374394	Botero Echeverry	Fabio	Director Territorial	0042	18
32	19341027	Moreno Prada	Cesar Augusto	Director Territorial	0042	18
33	92528651	Dorado Montes	Ramon del Cristo	Director Territorial	0042	18
34	14270552	Méndez Lezama	Carlos Fernando	Director Territorial	0042	18
35	18251385	Quintero Zuluaga	Edgar Ivan	Director Territorial	0042	18
36	19094373	Sarabia Villa	Guillermo Enrique	Asesor	1020	18
37	6757350	Cárdenas Yañez	Mario	Asesor	1020	16
38	32759537	Uscategui Luna	María Alexandra	Asesor	1020	16
39	80425202	Gómez Muñoz	Luis Fernando	Asesor	1020	15
40	13439899	Villamizar Gómez	Ricardo	Asesor	1020	15
41	63544715	Chedrauy Bravo	Marcela	Asesor	1020	13
42	80190016	González Niño	Julian Fernando	Asesor	1020	12
43	52426528	Muñoz Barrios	Nora Alejandra	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	1045	15
44	51650962	Martínez Traslaviña	María Celmira	Profesional Especializado	2028	21
45	91257937	Tellez Moreno	Ludwing	Profesional Especializado	2028	15
46	28177643	Peña Ardila	Luz Patricia	Secretario Bilingüe	4182	26
47	32733184	Ruiz Velez	Leinis Sair	Secretario Ejecutivo	4210	23
48	20645732	Garzón Alfonso	Andrea Liliana	Auxiliar Administrativo	4044	15
49	19401114	Capote Martínez	Jorge Ernesto	Conductor Mecánico	4103	19

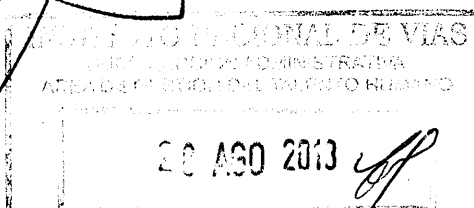
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos fiscales a partir de la fecha de posesión de los servidores públicos y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

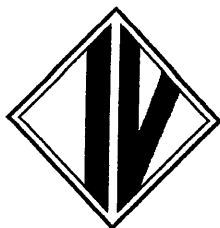
Dada en Bogotá, D. C.

19 DIC. 2013

LEONIDAS NARVAEZ MORALES



ES FIEL COPIA DE DOCUMENTO QUE
REPOSA EN LA HOJA DE VIDA



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE POSESION N° 00723

Fecha: 19 DIC 2013

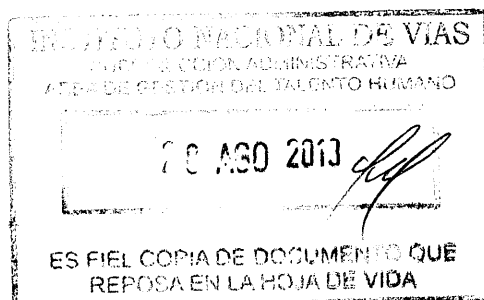
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, toma posesión al doctor (a) **JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON** identificado(a) con cédula de ciudadanía N° **76311695**, en el cargo de **Director Territorial** Código **0042** Grado **16**, de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, para el cual fue nombrado mediante Resolución N° 06479 del 19 de diciembre de 2013.

Se procedió a tomar el juramento de acuerdo al Numeral 3°, Artículo 2 de la Resolución N° 003895 de 2003 y con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política y en concordancia con lo dispuesto en los decretos N° 2400 de 1968 y N° 1950 de 1973.

Previamente se hizo inspección de los documentos exigidos para el desempeño de empleos públicos.


JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON
Firma del Posesionado


LEONIDAS NARVAEZ MORALES
Firma de quien posesiona





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Libertad y Orden



EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero **JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN**, identificado con C.C. **76.311.695**, presta servicios en esta entidad, desde el **1° de diciembre de 2011**, nombrado actualmente como **Director Territorial Código 0042 Grado 16** de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

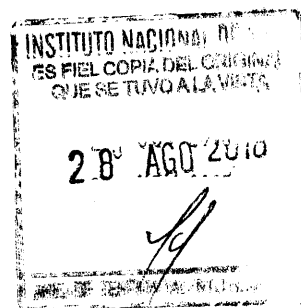
Que fue nombrado mediante Resolución N° 06479 del 19 de diciembre de 2013 y posesionado con Acta N° 0723 del 19 de diciembre de 2013.

La presente constancia se expide con destino a **FINES NOTARIALES, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS**.

Dada en Bogotá D.C., a 27 de agosto de 2018

LUIS RODRIGO BAEZ MORENO
Coordinador Grupo Gestión Talento Humano

Elaboró: John Betancourt Gomez. /Grupo Gestión Talento Humano



Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.
PBX: 7056000
<http://www.invias.gov.co>





MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

31 DIC 2018

Resolución Número de 2018

08121

"Por medio de la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas por los artículos: 209 y 211 de la Constitución Política; 9, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998; 11 y 12 de la Ley 80 de 1993; 21 de la Ley 1150 de 2007; 86 de la Ley 1474 de 2011; inciso 1 artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 7 numerales 7.15 y 7.18 del Decreto 2618 de 2013, y demás disposiciones concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la normatividad Constitucional y Legal arriba invocada, el Director General del Instituto Nacional de Vías – INVIAS-, tiene la competencia y/o facultad para delegar funciones en los funcionarios de nivel directivo y asesor de la Entidad, entre otras, las relacionadas con la gestión contractual.

Que el artículo cuarto del Decreto 2618 de 2013, determina las dependencias que conforman la estructura orgánica del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Que el numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto 2618 de 2013, designa a la dependencia denominada Dirección de Contratación, entre otras, la siguiente función:

"Dirigir el proceso de contratación, ordenar los gastos, expedir los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento del Instituto, cuando se le haya delegado"-negrilla fuera del texto-

Que conforme con la Jurisprudencia Constitucional, la ordenación del gasto es *"aquella facultad de los órganos estatales que disponen de autonomía presupuestal, para ejecutar el presupuesto de gastos asignado por la respectiva Ley Anual del Presupuesto, lo que genera un ámbito de decisión propio en punto a la contratación y a la disposición de los recursos adjudicados"*.

Que para efectos del presente acto administrativo son "Unidades Ejecutoras", las dependencias de la estructura orgánica del Instituto Nacional de Vías funcionalmente responsables de la coordinación, supervisión y control de la ejecución de los contratos y convenios de la Entidad, y los grupos de trabajo, a los cuales se les haya asignado esta función.

Que por razones de coordinación y eficiencia de la gestión contractual, resulta conveniente centralizar en un único comité internó la aprobación o no, de las solicitudes para adicionar, modificar, suspender y prorrogar los contratos suscritos por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS; y consecuentemente, definir los miembros que lo integran, así como su funcionamiento.

Que en consideración a que mediante Resolución 7581 del 10 de Diciembre de 2018, se suprimió el grupo interno de trabajo encargado del proyecto "Cruce de la Cordillera

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

Central - Túnel de la Línea", y además, se creó un nuevo grupo interno de trabajo denominado "Grupo de Gerencia de Proyectos Estratégicos", el cual asume -entre otros proyectos estratégicos- el del "Cruce de la Cordillera Central- Túnel de la Línea", es necesario, trasladar la planta de personal adscrita a ese grupo y los respectivos contratos que soportan dicho proyecto, al nuevo grupo creado en la citada Resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I:

EN MATERIA CONTRACTUAL

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en el titular de la **Dirección de Contratación** del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, la competencia para adelantar cualquiera sea su naturaleza y cuantía, los procesos de contratación de la Entidad **no delegados expresamente en otra dependencia o grupo interno de trabajo**, a través de la presente resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO: En desarrollo de la función delegada, a la mencionada dependencia le corresponde adelantar todas las actividades inherentes a los procesos contractuales, entre estas, las siguientes:

1. Ordenar el gasto.
2. Conformar el equipo estructurador de los procesos contractuales.
3. Expedir adendas.
4. Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación delegados.
5. Adjudicar o declarar desierto los procesos de selección.
6. Suscribir, modificar y terminar los contratos delegados.
7. Aprobar las pólizas de garantía de los contratos que suscriba.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se exceptúan de la delegación anterior, las siguientes actividades:

1. Estructurar los procesos de selección.
2. Elaborar y suscribir los estudios previos requeridos.
3. Adelantar el trámite para la expedición del registro presupuestal correspondiente.
4. Designar los gestores y/o supervisores del contrato o proyecto.
5. Elaborar y suscribir las actas propias de la ejecución del contrato, entre otras, las de inicio, suspensión, reanudación y liquidación. Ordenar el pago.
6. Suscribir el "Balance General del Contrato".
7. Expedir los certificados sobre la ejecución y cumplimiento de los contratos y convenios.
8. Registrar el expediente contractual en el SICO o en el Sistema de Información que lo modifique o reemplace.
9. Verificar y validar el registro de la información en el SIGEP.
10. Las demás actividades inherentes a las funciones de coordinación, supervisión y control de la ejecución del contrato.

Las actividades antes relacionadas como excepción, estarán a cargo de la respectiva dependencia funcionalmente responsable del proceso contractual y de los grupos internos de trabajo según el caso, que expresamente se determinen en la presente resolución.

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

PARÁGRAFO TERCERO: Las actas de liquidación de los contratos a que se refiere el presente artículo, deberán surtir un control previo de legalidad ante la Oficina Asesora Jurídica.

PARAGRAFO CUARTO: Las actividades a las que se refieren los numerales 2, 4 y 5 del Parágrafo Segundo, deberán ser reportadas a la Dirección de Contratación a más tardar el día siguiente de haber sido suscritas, para su correspondiente publicación en el SECOP o en el sistema que lo modifique o reemplace.

PARAGRAFO QUINTO: Exceptúese de la delegación a la que se refiere el presente artículo, la suscripción de los Convenios Interadministrativos que no impliquen el desembolso o traslado de recursos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en el coordinador del grupo interno de trabajo denominado Gerencia de Proyectos Estratégicos, adscrito a la Dirección Operativa, la competencia para adelantar las actividades inherentes a la etapa pre-contractual de los **proyectos que se determinen como estratégicos**, así como la ordenación del pago de los contratos y convenios que se suscriban en desarrollo de esta delegación.

ARTÍCULO TERCERO: Delegar en el titular de la **Secretaría General**, respecto de los **contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos** que sólo puedan encomendarse a determinadas personas la competencia para adelantar las actividades inherentes a las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual que funcionalmente requiera la mencionada Secretaría y las siguientes dependencias: Subdirecciones Administrativa y Financiera del Instituto, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, y Oficina de Control Interno. Estas actividades, entre otras, se refieren a:

1. Ordenar el gasto.
2. Publicar los documentos relacionados con los procesos contratación delegados.
3. Suscribir, modificar y terminar los contratos delegados.
4. Aprobar las pólizas de garantía de los contratos que suscriba.
5. Elaborar y suscribir las actas propias de la ejecución del contrato, entre otras, las de inicio, suspensión, reanudación y liquidación.
6. Designar los supervisores de los contratos delegados en presente artículo de los contratistas que presten sus servicios directamente a la Secretaría General.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se exceptúan de la actividad descrita en el numeral 6 del presente artículo, la designación de los supervisores de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, cuya ejecución contractualmente se desarrolle en las dependencias adscritas a esta secretaría; así como la elaboración de los estudios previos y demás documentos pre-contractuales, caso en el cual la designación de la supervisión de los mismos, estará a cargo del titular de la respectiva dependencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actas de liquidación unilateral de los contratos a que se refiere el presente artículo deberán surtir un control de legalidad previo, el cual estará a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

ARTICULO CUARTO: Delegar en el titular de la **Dirección Operativa**, respecto de los **contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos** que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, la competencia para adelantar las actividades inherentes a las etapas pre-contractual,

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

contractual y post-contractual que funcionalmente requiera la mencionada Dirección y las dependencias a su cargo: Subdirección de Red Nacional de Carreteras, Subdirección de Red Terciaria y Férrea, Subdirección de Red Marítima y Fluvial, y las Direcciones Territoriales. Estas actividades, entre otras, se refieren a:

1. Ordenar el gasto.
2. Publicar los documentos relacionados con los procesos contratación delegados.
3. Suscribir, modificar y terminar los contratos delegados.
4. Aprobar las pólizas de garantía de los contratos que suscriba.
5. Elaborar y suscribir las actas propias de la ejecución del contrato, entre otras, las de inicio, suspensión, reanudación y liquidación.
6. Designar los supervisores de los contratos delegados en presente artículo de los contratistas que presten sus servicios directamente a la Dirección Operativa.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se exceptúan de la actividad descrita en el numeral 6 del presente artículo, la designación de los supervisores de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, cuya ejecución contractualmente se desarrolle en las dependencias adscritas a esta dirección; así como la elaboración de los estudios previos y demás documentos pre-contractuales, caso en el cual la designación de la supervisión de los mismos, estará a cargo del titular de la respectiva dependencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actas de liquidación unilateral de los contratos a que se refiere el presente artículo deberán surtir un control de legalidad previo, el cual estará a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

ARTÍCULO QUINTO: Delegar en los titulares de las **Direcciones Territoriales** del Instituto Nacional de Vías: **(i)** respecto de los **contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos** que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, las siguientes competencias:

1. Estructurar, elaborar y suscribir los estudios previos requeridos para los procesos de mínima cuantía y de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, que deban ejecutarse en su respectiva Dirección Territorial.
2. Supervisar los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, que deban ejecutarse en su respectiva Dirección Territorial.
3. Suscribir las actas de liquidación por mutuo acuerdo de los contratos sobre los cuales ejerza su supervisión.
4. Elaborar el proyecto de acta de liquidación unilateral de los contratos y convenios -soporte de la resolución de liquidación unilateral que expida la Oficina Asesora Jurídica-, sobre los cuales ejerza su supervisión.
5. Notificar los actos administrativos que funcionalmente expida y los que para los mismos fines le sean remitidos por el nivel central.

(ii) La competencia para adelantar cualquiera sea su naturaleza, los procesos de contratación de la Entidad en su respectiva jurisdicción territorial que no excedan la menor cuantía para contratar del Instituto.

ARTÍCULO SEXTO: Delegar en el titular de la **Dirección Técnica**, la suscripción de los Convenios Interadministrativos que no impliquen el desembolso o traslado de

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

recursos que no suscriba el Director General, así como la aprobación de las respectivas pólizas, cuando haya lugar a ello. Así mismo, tendrá la facultad de designar los supervisores de los convenios que suscriba en desarrollo de esta delegación.

PARAGRAFO: Previo a la suscripción de los Convenios de que trata el presente artículo y de sus modificatorios, la Oficina Asesora Jurídica deberá realizar el control de legalidad correspondiente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Delegar, en el titular de la **Dirección Técnica**, respecto de los **contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos** que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, la competencia para adelantar las actividades inherentes a las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual que funcionalmente requiera la mencionada Dirección y las dependencias a su cargo: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, y Subdirección de Estudios e Innovación. Estas actividades, entre otras, se refieren a:

1. Ordenar el gasto.
2. Publicar los documentos relacionados con los procesos contratación delegados.
3. Suscribir, modificar y terminar los contratos delegados.
4. Aprobar las pólizas de garantía de los contratos que suscriba.
5. Elaborar y suscribir las actas propias de la ejecución del contrato, entre otras, las de inicio, suspensión, reanudación y liquidación.
6. Designar los supervisores de los contratos delegados en presente artículo de los contratistas que presten sus servicios directamente a la Dirección Técnica.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se exceptúan de la actividad descrita en el numeral 6 del presente artículo, la designación de los supervisores de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, cuya ejecución contractualmente se desarrolle en las dependencias adscritas a esta dirección; así como la elaboración de los estudios previos y demás documentos pre-contractuales, caso en el cual la designación de la supervisión de los mismos, estará a cargo del titular de la respectiva dependencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actas de liquidación unilateral de los contratos a que se refiere el presente artículo deberán surtir un control de legalidad previo, el cual estará a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

ARTÍCULO OCTAVO: Asignar en el titular de la **Oficina Asesora Jurídica**, las siguientes competencias:

1. Adelantar, a solicitud de la dependencia interesada, los trámites administrativos para la declaratoria de siniestros, hacer efectivas las garantías, imponer multas, adelantar los procesos sancionatorios correspondientes -y su eventual sanción-, y para expedir los actos administrativos a que haya lugar, en cada caso.
2. Expedir todos los actos administrativos de interpretación, modificación y terminación unilateral de los contratos y convenios suscritos por la Entidad, a solicitud de la dependencia interesada.

ARTÍCULO NOVENO: Certificado de no objeción. Las delegaciones para la contratación de **prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos** que solo puedan encomendarse a determinadas personas

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

a las que se refieren los artículos primero, segundo, tercero y quinto, de la presente resolución, requerirán sin excepción alguna, concepto previo vinculante de no objeción del eventual contratista expedido por el Director General del Instituto.

ARTÍCULO DÉCIMO: Delegar en el titular de la **Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias** la competencia para emitir concepto escrito (debidamente soportado) para declarar las urgencias manifiestas a que haya lugar.

TÍTULO II DELEGACIÓN EN OTRAS MATERIAS

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Asignar a los titulares de **cada una de las dependencias** que conforman la estructura orgánica del INVIAS, la competencia para:

1. Responder los derechos de petición relacionados con las actividades o funciones propias de la respectiva dependencia.
2. Proyectar para el visto bueno de su superior jerárquico, y posterior firma del Director General, la respuesta a las citaciones o peticiones del Congreso de la República, a más tardar dos (2) días antes del vencimiento de su término legal.
3. Autorizar las comisiones de servicio a los funcionarios de la respectiva dependencia y avalar el cumplimiento del objeto de la misma para su respectivo pago.
4. Conceder cuando medie justa causa, hasta tres (3) días de permiso remunerado a los servidores públicos a su cargo.
5. Ordenar los gastos y autorizar el pago del reembolso de la caja menor que corresponda a su dependencia.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Asignar al **Secretario General**, además de las funciones delegadas en la presente resolución, las siguientes:

1. Reconocer y ordenar el pago de las comisiones de servicio del titular de la Subdirección Administrativa. En ausencia del titular de la Secretaría General, el reconocimiento y el pago de estas comisiones la hará el Director Operativo.
2. Dar posesión a los funcionarios del Nivel Directivo y Asesor de la Entidad.
3. Evaluar y aprobar las propuestas de modificaciones, traslados, y en general los ajustes del presupuesto de funcionamiento y proyectos de inversión, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera.
4. Numerar, publicar o comunicar, según el caso, las resoluciones que en ejercicio de sus funciones expidan los titulares de las dependencias de la sede central del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Asignar en el **Subdirector Administrativo**, además de las actividades contempladas en la presente resolución, las siguientes:

1. Dar posesión a los servidores públicos de la sede central del Instituto Nacional de Vías, que no correspondan a los niveles Directivo y Asesor.
2. Reconocer y ordenar el pago de las comisiones de servicio de los funcionarios y contratistas del nivel central del Instituto, autorizadas previamente por el titular de la respectiva dependencia a la cual se encuentren adscritos.
En ausencia del titular de la Subdirección Administrativa, el reconocimiento y el pago de las comisiones la hará el Secretario General.
3. Expedir las certificaciones de inexistencia de personal del Instituto, proyectados por el Coordinador del grupo del Talento Humano, o quien haga sus veces.
4. Ordenar los descuentos por retardos de los servidores públicos de la sede central del Instituto Nacional de Vías en los términos definidos por las normas vigentes sobre la materia.
5. Autorizar y ordenar el gasto, y reconocer el pago de los siguientes conceptos:

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

- 5.1. Salarios y prestaciones sociales y reconocimiento de haberes de los servidores públicos del Instituto.
- 5.2. Obligaciones de carácter laboral reconocidas a ex servidores del Instituto.
- 5.3. Horas extras, dominicales y feriados del personal de sede central del Instituto.
- 5.4. Aportes a entes de control y vigilancia, y demás conceptos similares, sin límite de cuantía.
- 5.5. Servicios públicos domiciliarios, sin límite de cuantía.
- 5.6. Multas por comparendos impuestos por la autoridad competente, sin perjuicio de analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a dicho comparendo y se adelante el respectivo proceso de recobro, según el caso.
- 5.7. Impuestos y/o contribuciones sobre los inmuebles de propiedad del Instituto, cualquiera sea su cuantía y naturaleza, cuando la función no esté delegada en el titular de las Direcciones Territoriales, caso en el cual este cumplirá la función delegada, bajo la dirección y coordinación de la Subdirección Administrativa.
- 5.8. Impuestos sobre vehículos de propiedad y/o a cargo del Instituto, cualquiera sea su cuantía y naturaleza.
- 5.9. Certificaciones sobre la revisión técnica en identificación de automotores.
- 5.10. Las demás obligaciones no contempladas expresamente en la presente resolución y que correspondan a funciones de la Subdirección Administrativa.
6. Ordenar las salidas de elementos devolutivos del almacén con destino a las dependencias del Instituto Nacional de Vías.
7. Ordenar la salida del almacén de los bienes del Instituto, de acuerdo con el procedimiento administrativo de la entidad.
8. Mantener actualizado el inventario de todos los bienes muebles de propiedad del Instituto Nacional de Vías, incluidos entre otros, puentes metálicos, ferris, dragas, paladragas y equipos de pesaje.
9. Conceder previo visto bueno del respectivo titular de la dependencia a la cual esté adscrito, las vacaciones de los servidores públicos de la sede central del Instituto y de los Directores Territoriales.
10. Ordenar el aplazamiento, interrupción, suspensión y la compensación de las vacaciones de los funcionarios de la entidad, autorizadas previamente por el titular de la respectiva dependencia a la cual se encuentren adscritos, de acuerdo con las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal.
11. Autorizar licencias ordinarias y sus prórrogas, previo visto bueno del titular de la respectiva dependencia, así como legalizar licencias por enfermedad, maternidad, paternidad, calamidad y accidentes de trabajo a los servidores públicos del Instituto.
12. Expedir constancias y certificaciones de tiempo de servicio y horas extras a los servidores públicos del Instituto.
13. Autenticar las copias de los documentos que reposen en el archivo central del Instituto Nacional de Vías a cargo de la Subdirección Administrativa.
14. Adelantar ante los Organismos de Tránsito, Ministerio de Transporte y Aseguradoras los trámites necesarios para perfeccionar todos los negocios jurídicos que realice la Entidad relacionados con los vehículos automotores de propiedad del Instituto Nacional de Vías, incluido el de la tradición de los vehículos automotores que se encuentren a su cargo, como los de aquellos que pretenda adquirir y los relacionados con el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales. Así mismo, los trámites relacionados con el RUNT, el SIM, la matrícula, traslado de cuenta, cancelación de matrícula, solicitud de placas y los demás tramites que se originen en el marco de los procedimientos establecidos para los vehículos del Instituto y los que tenga bajo su responsabilidad.
15. Adelantar las acciones o actividades previas tendientes a la enajenación de los terrenos sobrantes y/o no utilizados en la ejecución de proyectos de infraestructura vial que hayan sido identificados por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social conforme al levantamiento topográfico y la información predial remitida por esta. Así mismo, adelantar las gestiones

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

- tendientes al desenglobe de dichas áreas y/o actualización de cabida y linderos, si es necesario, y tramitar la desafectación ante la autoridad competente.
16. Adelantar las gestiones previas para la venta directa de que trata la Ley 9 de 1989 en sus artículos 34 y 36, así como las acciones previas al procedimiento de licitación o contratación directa de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen, adicionen y/o aclaren, para la enajenación de inmuebles.
 17. Adelantar las gestiones tendientes al englobe, desenglobe, actualización de cabida y linderos y/o cualquier aclaración a que haya lugar para los bienes inmuebles fiscales de propiedad del Instituto. Los instrumentos públicos resultantes de esta gestión serán suscritos por el Subdirector Administrativo salvo los instrumentos públicos a que se refieren el numeral 5 del Artículo Décimo Quinto de la presente resolución, los cuales serán suscritos por el Director Territorial correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Asignar en el **Subdirector Financiero**, además de las actividades contempladas en la presente resolución, las siguientes:

1. Reconocer y ordenar el pago de la deuda interna y externa a cargo del Instituto Nacional de Vías.
2. Expedir los certificados de inembargabilidad a que haya lugar relacionados con las órdenes de embargo judicial o administrativa que se profieran en contra del INVIAS.
3. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes que en virtud de la presente resolución no hayan sido delegados a otra dependencia.

PARÁGRAFO: Continuarán a cargo del Subdirector Financiero las delegaciones y actividades contenidas en las Resoluciones No 1281 del 05 de abril de 2004, 3964 del 03 de septiembre de 2010 y 6033 del 08 de noviembre de 2011 y aquellas que las modifiquen y/o adicionen.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Delegar en el **Director Operativo**, además de las funciones contempladas en la presente resolución, las siguientes:

1. Reconocer y ordenar el pago de las comisiones de servicio de los titulares de las Subdirecciones a su cargo, de los Directores Territoriales, y del personal directamente adscrito a su Dirección.
2. Suscribir los certificados solicitados para la financiación y giro de los recursos de regalías según los acuerdos expedidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
3. En ausencia del Subdirector Administrativo, reconocer y ordenar el pago de las comisiones de servicio del Secretario General.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Delegar y asignar en los **Directores Territoriales** además de las funciones contempladas en la presente resolución, las siguientes:

1. Ejercer la representación legal del Instituto Nacional de Vías, en todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos, dentro de su jurisdicción y en ejercicio de la misma constituir como mandatarios a los servidores públicos de la Dirección Territorial o abogados externos (de acuerdo con la especialidad del caso), otorgar poderes y notificarse de todas las actuaciones judiciales y administrativas, y demás asuntos que se deriven de las mismas, salvo los asuntos judiciales que se reserve expresamente el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
2. Dirigir las audiencias de los procesos de contratación por monto agotable y de administradores viales, relacionados con su jurisdicción. Esta delegación, es subsidiaria de la competencia que en la presente resolución se le Director de Contratación.

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

3. Dar visto bueno a los documentos relacionados con las funciones delegadas a la Secretaría General en los numerales 5, 6 y 7 del artículo décimo primero de la presente resolución.
4. Autorizar el pago de los impuestos y/o contribuciones sobre los inmuebles de propiedad del Instituto, ubicados en la respectiva jurisdicción territorial cualquiera sea su cuantía y naturaleza, cuando la competencia no sea ejercida por la Subdirección Administrativa. La delegación conferida en el presente numeral se cumplirá bajo la dirección y coordinación de la Subdirección Administrativa.
5. Expedir y autenticar copias de documentos que reposen en los archivos de la Dirección Territorial.
6. Posesionar los servidores públicos de la respectiva Dirección Territorial.
7. Autorizar el pago de horas extras, dominicales y feriados de los servidores públicos de la Dirección Territorial.
8. Autorizar descuentos por retardos de los servidores públicos de la Dirección Territorial de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia.
9. Autorizar el pago del reembolso de la caja menor de la Dirección Territorial.
10. Adelantar los trámites para otorgar los permisos para cierre de vías coordinando lo necesario con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y remitir a la Dirección Técnica los respectivos actos administrativos para su suscripción.
11. Numerar las resoluciones que se profieran en la respectiva Dirección Territorial en ejercicio de sus funciones.
12. Adelantar las gestiones concernientes a la notificación de resoluciones de distribución y modificación, expedición de paz y salvos, así como los trámites inherentes al Cobro de la Contribución de Valorización Nacional que se relacionan a continuación:
 - 12.1 Informar a los contribuyentes del cobro de la Contribución de Valorización Nacional.
 - 12.2 Atender a los contribuyentes en caso de solicitar información sobre el estado de cuenta, así como la entrega de facturación a los contribuyentes, de acuerdo con la información remitida trimestralmente (Listados de Cuenta) a las Direcciones Territoriales por la Subdirección de Estudios e Innovación del INVIAS.
 - 12.3 Atender y orientar a los contribuyentes respecto a los procedimientos necesarios para la reclamación y pago de las contribuciones de Valorización.
 - 12.4 Expedir los Paz y Salvos, previa verificación con la Subdirección de Estudios e Innovación – Grupo Peajes y valorización, del ingreso del pago y cancelación total de la contribución de valorización.
 - 12.5 Notificar las Resoluciones de Distribución y Modificatorias que por motivo de distribución, actualización y/o reclamos de contribuyentes surjan durante el tiempo de cobro.
 - 12.6 Adelantar actividades de cobro persuasivo a contribuyentes morosos, mediante visitas a predios, envío de comunicaciones al lugar de residencia, llamadas telefónicas, comunicados de prensa, y/o cualquier otro medio oficialmente destinado para tal fin, enviando reporte de ello semanalmente a la Oficina Asesora Jurídica.
 - 12.7 Apoyar logísticamente a los servidores públicos de sede central y/o contratistas cuando se requiera entregar información e inspeccionar y actualizar en terreno los predios ubicados en las Zonas de Influencia de las Vías a cargo de la respectiva Dirección Territorial.
 - 12.8 Atender las solicitudes realizadas por los contribuyentes como derechos de petición. Cuando para proferir la respuesta se requiera de conocimiento técnico en la materia, la Subdirección de Estudios e innovación realizará acompañamiento a la Dirección Territorial en la respuesta a la solicitud. En todo caso una vez obtenida la información, la Dirección Territorial deberá producir la respectiva respuesta de fondo, dentro del término legal establecido.

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Delegar en el **Director Técnico**, además de las funciones contempladas en la presente resolución, las siguientes:

1. Reconocer y ordenar el pago de las comisiones de servicio de los titulares de las Subdirecciones a su cargo, y del personal directamente adscrito a su Dirección.
2. Dirigir el proceso de recaudo de peajes.
3. Conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles, extradimensionadas y extrapesadas.
4. Conceder los permisos para el transporte por las carreteras de la red vial nacional de caña de azúcar, bagazo de caña de azúcar y productos mineros.
5. Conceder los permisos de uso de zona de vía.
6. Conceder los permisos para cierres de vías, coordinando lo necesario con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cuando sea del caso, previo concepto de la Subdirección de Estudios e Innovación del Instituto, y suscribir el acto administrativo que autoriza el respectivo permiso.
7. Expedir los actos administrativos por medio de los cuales se impongan servidumbres durante la etapa de construcción de los proyectos de infraestructura de transporte, de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.
8. Suscribir, en coordinación con la Dirección Territorial, la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, y de la Oficina Asesora Jurídica, las promesas de compraventa y las respectivas Escrituras Públicas, cualquiera sea su cuantía.
9. Suscribir, en coordinación la Dirección Territorial, la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, y de la Oficina Asesora Jurídica, las cesiones a que se refieren los artículos 32, 35 y 36 de la Ley 1682 de 2013, o lo que dispongan sus decretos reglamentarios, y demás normas que los modifiquen, así como las respectivas Escrituras Públicas, cualquiera sea su cuantía.
10. Suscribir, en coordinación con la Dirección Territorial, la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, y de la Oficina Asesora Jurídica las promesas de compraventa y las respectivas Escrituras Públicas, cualquiera sea su cuantía que de acuerdo con las normas vigentes sean bienes sobre los cuales se ejerza el derecho de preferencia así como las relacionadas con la enajenación de terrenos sobrantes y/o no utilizados en la ejecución de proyectos de infraestructura vial que hayan sido debidamente desafectados y las relacionadas con el englobe, desenglobe de terrenos y/o actualización de áreas y linderos.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Delegar y asignar en el **Subdirector del Medio Ambiente y Gestión Social**, además de las funciones contempladas en la presente resolución, las siguientes:

1. Adelantar el procedimiento de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública, establecido en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1564 de 2013, Ley 1682 de 2013 y Ley 1742 de 2014 y sus decretos reglamentarios, y en general aquellas normas que las modifiquen o complementen.
2. Adelantar la gestión para la adquisición de los inmuebles requeridos para dar cumplimiento a las obligaciones ambientales y/o sociales, a cargo de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Instituto.
3. Realizar cuando se requiera la gestión precontractual, contractual y post contractual que sea necesaria para la adquisición de los inmuebles, mejoras y derechos que sean requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura que adelante el Instituto Nacional de Vías.
4. Adelantar las acciones administrativas requeridas para dar impulso a la expropiación de los inmuebles necesarios para la ejecución de los proyectos a cargo del Instituto.
5. Expedir los actos administrativos por medio de los cuales se disponga el trámite de expropiación administrativa o judicial de los predios y/o zonas de terreno requeridas para la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo del Instituto, incluyendo su respectiva notificación cuando esta no se realice a través de los

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

- contratistas en virtud de los contratos de obra suscritos por la Entidad. La expedición de la constancia de ejecutoria del acto administrativo corresponde al Subdirector de Medio Ambiente y Gestión Social. Todo lo anterior, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica.
6. Aprobar y dar visto bueno a los contratos de promesa de compraventa, cesiones de que tratan los artículos 32, 35 y 36 de la Ley 1682 de 2013, o las que las modifiquen o sustituyan y de las correspondientes Escrituras Públicas, para la suscripción de los respectivos Directores Territoriales, de acuerdo con su jurisdicción.
 7. Previo avalúo, ordenar el pago sin límite de cuantía, del valor de los predios requeridos en el desarrollo de proyectos de infraestructura de la Entidad, cuando estos pagos se adelanten con cargo al presupuesto del Instituto.
 8. Adelantar cuando se requiera los trámites y gestiones pertinentes, para la inscripción de afectaciones, desafectaciones y levantamiento de limitaciones, gravámenes y medidas cautelares en los folios de matrícula inmobiliaria, de los predios que se hubiesen requerido para la expansión de la infraestructura de transporte, pero que ya no se necesitan para esos fines, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y sus decretos reglamentarios, y demás normas que las modifiquen.
 9. Adelantar las acciones o actividades para realizar los levantamientos topográficos y la información predial requerida de los terrenos sobrantes y/o no utilizados en la ejecución de proyectos de infraestructura vial para ser remitidos a la Subdirección Administrativa con el fin de que esta adelante el trámite correspondiente al desenglobe de dichas áreas y/o actualización de cabida y linderos, si es necesario, y tramite la desafectación ante la autoridad competente, lo que finaliza una vez se produzca el cambio de destinación del inmueble de uso público a bien de uso fiscal.
 10. Reconocer y ordenar el pago, sin límite de cuantía, de multas y sanciones por incumplimiento de la normatividad ambiental cuando estos pagos se adelanten con cargo al presupuesto del Instituto. En estos eventos las Unidades Ejecutoras y la Oficina Asesora de Planeación apoyarán a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social con la consecución de los recursos requeridos, cuando sea del caso.

PARÁGRAFO: Continuarán a cargo al titular de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social las delegaciones y actividades contenidas en las Resoluciones No. 2747 de 6 de mayo de 2015 y 7310 de 15 de octubre de 2015, y aquellas que las modifiquen y/o adicionen.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Delegar en el Subdirector de **Estudios e Innovación** emitir concepto técnico sobre la ubicación de estaciones de servicio automotriz en carreteras a cargo de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4915 de 2011 y en la Resolución 01361 del 04 de abril de 2012 proferida por el Ministerio de Transporte o en las normas que los modifiquen, adicionen, o deroguen.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Asignar en el titular de la **Oficina de Control Interno** la asistencia a las audiencias que se realicen en la sede central de la Entidad en desarrollo de los procesos de selección de contratistas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Asignar en el titular de la **Oficina Asesora Jurídica** además de las funciones contempladas en la presente resolución, las siguientes:

1. Ejercer la representación judicial, extrajudicial y en las actuaciones administrativas, al Instituto en los procesos que se adelanten en su contra o en defensa de sus intereses.

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

2. Otorgar poderes a los servidores públicos del INVÍAS o a particulares que tengan la calidad de abogados titulados, inscritos y en ejercicio, para que adelanten la defensa de los intereses de la Entidad, y para llevar a cabo todas las actuaciones relacionadas con la representación del Instituto en los procesos judiciales y administrativos ante la autoridad competente, lo anterior respecto del nivel central.
3. Notificar los actos administrativos expedidos por el Instituto, salvo aquellos que sean remitidos a las Direcciones Territoriales para su respectiva notificación.
4. Adelantar los trámites necesarios y suscribir la respectiva autorización de pago por concepto de las obligaciones derivadas de sentencias, conciliaciones, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos administrativos y en general cualquier otro gasto derivado de orden judicial, y expedir el acto administrativo correspondiente.
5. Proyectar para la firma del Director General, los actos administrativos relacionados con reintegro de personal y pensión- sanción, de acuerdo con los fallos judiciales de carácter laboral.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Asignar en el **funcionario titular del cargo Asesor de la Oficina Asesora Jurídica** asignado al Grupo de Procesos Judiciales y de Litigio las siguientes funciones:

1. Suscribir y tramitar la correspondencia relacionada con las funciones propias del Grupo Interno de Procesos Judiciales y Litigantes.
2. Autenticar las copias de los documentos administrativos y actas que reposen en el archivo de la Oficina Asesora Jurídica.

TÍTULO III

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El Comité de adiciones, modificaciones y prórrogas del Instituto Nacional de Vías estará integrado por los titulares de los siguientes cargos, y su asistencia será indelegable:

El Director Operativo, quien lo presidirá.

El Secretario General.

El Director Técnico.

El Director de Contratación.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien solo tendrá voz.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaría Técnica del Comité, estará a cargo de un delegado de la Dirección Operativa, quien citará a las sesiones del Comité y levantará el acta correspondiente, la cual deberá ser suscrita por todos sus asistentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A las sesiones asistirá un invitado permanente por parte de la Dirección General, quien sólo tendrá voz. Adicionalmente, de acuerdo con el tema objeto de análisis por parte del Comité, se podrá convocar la asistencia de otros invitados que el Comité considere pertinentes, según los asuntos a tratar.

PARÁGRAFO TERCERO: El Comité se reunirá en la sala de juntas de la Dirección General, o virtualmente, cada que sea convocado por el Secretario Técnico del mismo. Sesionará ordinariamente los días miércoles de cada semana a las 9:00 a.m. con la asistencia mínima de tres (3) de sus integrantes que tengan voz y voto, y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los integrantes que componen el mismo. En caso de requerirse podrá sesionar extraordinariamente.

"Por medio de la cual se delegan y asignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Trasladar la planta de cargos, los contratos y convenios del suprimido Grupo Túnel de la Línea, al Grupo de Proyectos Estratégicos de la Dirección Operativa.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El Director General del INVIAS, conserva la facultad de reasumir en cualquier momento las funciones delegadas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica la Resolución No. 07233 del 16 de octubre de 2016, que modificó parcialmente el Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante Resolución 1676 de 2015 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las que se relacionan a continuación, incluidos sus modificatorios o aclaratorios:

- 1326 del 08 de marzo de 2012,
- 0222 del 16 de enero del 2014,
- 1120 del 28 de febrero de 2014,
- 1611 del 25 de marzo de 2014,
- 0016 del 05 de enero de 2015,
- 4805 del 15 de julio de 2015,
- 5861 del 21 de noviembre de 2005,
- 0906 del 16 de febrero de 2016,
- 1147 del 23 de febrero del 2016,
- 1414 del 03 de marzo de 2016,
- 1729 del 16 de marzo de 2016,
- 1785 del 18 de marzo de 2016,
- 3402 del 23 de mayo de 2016,
- 6400 del 15 de septiembre de 2016,
- 6481 del 19 de septiembre 2016,
- 0034 del 05 enero del 2017,
- 0344 del 25 de enero de 2017
- 2341 del 04 de abril de 2017,
- 2499 del 10 de abril de 2017,
- 2803 del 24 de abril de 2017,
- 5519 del 30 de agosto de 2018,
- 7017 del 13 de septiembre de 2017.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá, D.C.,

31 DIC 2018

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA
DIRECTOR GENERAL

Clara Margarita Montilla Herrera - Secretaria General
Luz Miryam Ciro Florez - Directora de Contratación
Nadia Maryori Maya Lopera - Directora Técnica
Juan Esteban Romero Toro- Director Operativo
María Victoria Uribe Dussán- Jefe Oficina Asesora Jurídica


LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

HACE CONSTAR:

Que el (la) señor (a) **José Adrián Valencia Castrillon** , identificado (a) con **C.C. 76.311.695**, presta servicios en esta entidad, desde el **15 de Marzo de 1994**, en jornada laboral de **8:00 a.m. a 5:30 p.m.**, de **lunes a viernes**, nombrado desde el 19 de diciembre de 2013 en el cargo de **Director Territorial Código 0042 Grado 16**, en la **Dirección Territorial Cauca**, con sede en la ciudad de **Popayan**.

La presente constancia se expide con destino a **FINES NOTARIALES, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS**.

Dada en Bogotá D.C., a 16 de septiembre de 2020

 Firmado digitalmente
por LUCY AMANDA
MUÑOZ SOSSA

LUCY AMANDA MUÑOZ SOSSA
Coordinadora Grupo Gestión Talento Humano

Elaboró: John Betancourt Gomez / Grupo Gestión Talento Humano

N°. 2020-0585